

LA DIALÉCTICA DEL DESARROLLO CAPITALISTA EN BRASIL¹

El golpe militar que depuso al presidente constitucional de Brasil, João Goulart, en abril de 1964, fue presentado por los militares brasileños como una revolución, y definido un año después por uno de sus voceros como una “contrarrevolución preventiva”. Por sus repercusiones internacionales, sobre todo en América Latina, y ante las concesiones económicas que tuvo para los capitales norteamericanos, muchos lo consideraron sencillamente como una intervención disfrazada de Estados Unidos. Esta opinión es compartida por ciertos sectores de la izquierda brasileña que, sin embargo, nunca supieron explicar por qué, en el momento mismo en que parecían llegar al poder, éste les fue arrebatado sorpresivamente sin que se disparara un solo tiro.

A nosotros nos parece que ninguna explicación de un fenómeno político es buena si lo reduce sólo a uno de sus elementos, y que es decididamente mala si toma por clave justamente un factor que lo condiciona desde fuera. En un mundo caracterizado por la interdependencia, y más que ello, por la integración, nadie niega la influencia de los factores internacionales sobre las cuestiones internas, principalmente cuando se está en presencia de una eco-

¹ Extraído de Ruy Mauro Marini, *Subdesarrollo y revolución*, México, Siglo XXI, 12ª edición, 1985, pp. 2-105.

nomía de las llamadas *centrales, dominantes o metropolitanas*, y de un país periférico, subdesarrollado. Pero ¿en qué medida se ejerce esta influencia? ¿Qué fuerza tiene frente a los factores internos específicos de la sociedad sobre la cual actúa?

Brasil, con sus 90 millones de habitantes y una economía industrialmente diversificada, es una realidad social compleja, un compromiso cuya dinámica, aunque condicionada y limitada por el marco internacional en que se inserta, rehúye las interpretaciones unilaterales. Sin un análisis de la problemática brasileña, de las relaciones de fuerza allí existentes entre los grupos políticos, de las contradicciones de clase que se desarrollaban con base en una configuración económica dada, no se comprenderá el cambio político que experimentó a partir de 1964. Peor que esto, no se podrá relacionar ese desarrollo político con la realidad económico-social que se encuentra en su base, ni estimar las perspectivas probables de su evolución. Perspectivas que, a fin de cuentas, no se refieren tan sólo a Brasil, sino a toda Latinoamérica.

1. POLÍTICA Y LUCHA DE CLASES

La historia política brasileña presenta, en este siglo, dos fases bien caracterizadas. La primera, que va de 1922 a 1937, es de gran agitación social, marcada por varias rebeliones y una revolución, la de 1930. Sus causas pueden buscarse en la industrialización que se produce en el país en la década de 1910, gracias sobre todo a la guerra de 1914, que conduce a la economía brasileña a realizar un considerable esfuerzo de sustitución de importaciones. La crisis mundial de 1929 y sus repercusiones sobre el mercado internacional van a mantener en un bajo nivel la capacidad de importación del país, acelerando, de esta manera, su proceso de industrialización.

Las transformaciones que operan en la estructura económica en ese período se expresan, socialmente, en el surgimiento de una nueva clase media, es decir, de una burguesía industrial directamente vinculada al mercado interno, y de un nuevo proletariado, que presionan a los antiguos grupos dominantes para

obtener un lugar propio en la sociedad política. El resultado de las luchas desencadenadas por ese conflicto es, por intermedio de la revolución de 1930, un compromiso —*Estado Nôvo* de 1937, bajo la dictadura de Getúlio Vargas—, con el cual la burguesía se estabiliza en el poder, en asociación con los terratenientes y los viejos grupos comerciantes, al mismo tiempo que establece un esquema particular de relaciones con el proletariado. En este esquema, el proletariado será beneficiado por toda una serie de concesiones sociales (concretadas sobre todo en la legislación laboral del *Estado Nôvo*) y, por otra parte, encuadrado en una organización sindical rígida, que lo subordina al Gobierno, dentro de un modelo de tipo corporativista.

LA COALICIÓN DOMINANTE: LA PRIMERA FISURA

Con pequeños cambios, y a pesar de que se derroca a la dictadura de Vargas, este compromiso político de 1945, este contrato social —si se le puede llamar así— se mantiene estable hasta 1950. Empieza entonces un nuevo período de agudas luchas políticas, de las que el suicidio de Vargas (que regresa al poder mediante elecciones), en 1954, es el primer fruto, y que conducirán al país, en 10 años tormentosos, al golpe militar de 1964. En la raíz de esas luchas encontramos el esfuerzo de la burguesía industrial por poner a su servicio el aparato del Estado y los recursos económicos disponibles; rompiendo, o por lo menos transgrediendo, las reglas del juego que se habían fijado en 1937. Pero las razones, en verdad, son más profundas: se asiste, en ese período, al deterioro de las condiciones en las que se basaban esas reglas, lo que se debe, por una parte, al crecimiento constante del sector industrial, y por otra, a las dificultades que, apareciendo primero en el sector externo, hicieron que la complementariedad hasta entonces existente entre el desarrollo industrial y las actividades agroexportadoras se convirtieran en una verdadera oposición.

Junto con la escisión vertical que se producía entre las clases dominantes, las presiones de las masas en busca de nuevas conquistas sociales rompen el dique que la dictadura les impuso hasta

1945, y que el gobierno fuerte del mariscal Dutra (1945-1950) había mantenido. La fuerza ascendente del movimiento de masas, que se expresa ya en la elección de Vargas como presidente de la República (cuando, por primera vez en Brasil, llegó al poder un candidato de la oposición), es estimulada por la burguesía, que se apoya en ella para quebrar la resistencia de las antiguas clases dominantes. Esa alianza era posible porque, proponiendo un amplio programa de expansión económica, la burguesía abría perspectivas de empleo y de elevación del nivel de vida a la clase obrera y a las clases medias urbanas, creando de esta manera una zona de intereses comunes que tendían a expresarse políticamente en un comportamiento homogéneo. Esa tendencia será acentuada por la burguesía mediante el manejo de las directivas sindicales (vía Ministerio del Trabajo) y con el impulso que dio a las ideas nacionalistas, que le permitieron ejercer un control ideológico sobre las masas.

Reflejando esa correlación de fuerzas, Getúlio Vargas no tarda en definirse por una política progresista y nacionalista, de la que fueron frutos: la creación, en 1952, del Banco Nacional de Desarrollo Económico; la decisión de concretar el Plan Salte (programación de las inversiones públicas en los sectores de salud, alimentación, transporte y energía); el Plan Nacional de Carreteras y el Fondo Nacional de Electrificación; el reequipamiento de la marina mercante y del sistema portuario; el monopolio estatal del petróleo (Petrobrás) y el proyecto de monopolio estatal de energía eléctrica (Electrobrás). El envío al Congreso de un proyecto de ley limitando los beneficios extraordinarios y los pronunciamientos favorables a la restricción de la exportación de beneficios se vio acompañado, por el Gobierno, de una política laboral destinada a atraer el apoyo obrero, algo que Vargas confió a un joven gaucho desconocido llamado João Goulart, a quien nombró ministro del Trabajo.

En un esfuerzo por movilizar de modo orgánico a las masas obreras, Goulart echó mano de diferentes métodos, desde el aumento del salario mínimo (congelado desde 1945) hasta la organización unitaria de las directivas sindicales. La demostración

de fuerza que representó el I Congreso Nacional de la Previsión Social en Río de Janeiro, y los ataques que allí, rodeado de conocidos líderes comunistas, lanzó Goulart contra las oligarquías dominantes y la explotación imperialista, conmovieron a la derecha y asustaron a las clases dominantes con la amenaza de una *república sindicalista* de tipo peronista. Las estrechas relaciones de amistad que mantenían el Brasil de Vargas y la Argentina de Perón reforzaban ese temor. Presionado furiosamente, Goulart se vio obligado a abandonar el ministerio y a exiliarse en Uruguay.

Era, para Vargas, el principio del fin. Retrocediendo ante la reacción derechista, trató de calmar la furia de la oposición con varias medidas, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional y la prórroga y ampliación del acuerdo militar Brasil-Estados Unidos. La primera, sin consecuencias inmediatas, creaba el marco jurídico para la represión del movimiento popular, que el gobierno militar de 1964 utilizaría ampliamente; el segundo ponía definitivamente a las Fuerzas Armadas brasileñas bajo la influencia del Pentágono norteamericano. Pero el mejor ejemplo de la política de conciliación de Vargas fue la reforma cambiaria de 1953, con la cual se buscó incrementar las exportaciones y contener las importaciones (realizadas, bajo el control gubernamental, en el mercado oficial), al mismo tiempo que, transfiriéndolas al mercado libre, se liberaba la entrada y salida de capitales.

Esa reforma cambiaria, si bien tuvo poca influencia sobre las exportaciones, comprimió fuertemente el nivel de las importaciones, equilibrando provisionalmente las cuentas externas del país, aunque buena parte del saldo así obtenido fue absorbido por la evasión de divisas permitidas por el nuevo sistema.

La caída del precio internacional del café y la reducción del volumen de las exportaciones brasileñas hicieron que, en 1954, la balanza comercial volviera a presentar un déficit, lo que lanzó nuevamente a la economía a una grave crisis cambiaria. Internamente, la marcha de la inflación (el promedio mensual de los precios pasó de 175 en 1953 a 222 en 1954) impulsó al movimiento obrero a reivindicar reajustes de salarios; ahora los sindicatos contaban con el recurso efectivo de la huelga (cuyo derecho fue

conquistado, de hecho, con el gran paro de los metalúrgicos, vidrieros y gráficos en São Paulo, en 1953).

Sobre esa base, la campaña de la derecha se intensificó —dirigida por un periodista llamado Carlos Lacerda— frente a Vargas, cuya política de conciliación lo aisló de las masas y atrajo la oposición de sus fuerzas organizadas, sobre todo de los comunistas. Un intento de asesinar a Lacerda, aunque frustrado, proporcionó el pretexto para que se exigiera la renuncia del presidente, puesto que varios miembros de su gabinete habían quedado comprometidos. En la madrugada del 24 de agosto, virtualmente depuesto, Getúlio Vargas se suicidó disparándose un tiro en el corazón.

“Una vez más [decía en un mensaje póstumo, divulgado poco después por Goulart] las fuerzas y los intereses contrarios al pueblo se unieron y nuevamente se desencadenaron contra mí”. Tras denunciar como responsables de su muerte a los grupos económicos nacionales e internacionales, Vargas concluía:

He luchado mes a mes, día a día, hora a hora, resistiendo a una presión constante, incesante, soportando todo en silencio, olvidando todo, renunciando a mí mismo para defender al pueblo, que ahora se queda desamparado. No puedo daros nada más que no sea mi propia sangre.

Se cerraba así un período de gobierno que marcó la eclosión de las contradicciones que se venían gestando hacía mucho en el proceso de desarrollo económico de Brasil. El hecho básico que debe considerarse es que la industria nacional se expandió gracias al sistema semicolonial de exportación, que caracterizó a la economía brasileña antes de los años treinta, y que esa industria no sufrió limitación o competencia sensible, en virtud de las condiciones excepcionales que habían creado la crisis de 1929 y el conflicto mundial. El compromiso político de 1937 había tenido por base esa realidad objetiva. Hacia los años cincuenta la situación cambia. Mientras la industria se empeña en mantener altos los tipos de cambio, lo que la lleva a chocar con el sector agroexportador, cuyas ganancias quedaban así disminuidas, es-

te sector ya no puede ofrecer a la industria el monto de divisas que le había proporcionado en otros tiempos. Por el contrario, muchas veces se hace necesario que, mediante la formación de existencias generosamente pagadas, el Gobierno garantice las ganancias de los plantadores y exportadores, existencias que, en verdad, corresponden a la inmovilización de recursos necesarios para la actividad industrial.

La crisis del sector externo de la economía brasileña expresaba, por lo tanto, la ruptura de la complementariedad que había caracterizado las relaciones de la industria con las actividades agroexportadoras. Esta crisis se agravó con otro elemento: la remuneración del capital extranjero. Como observa Caio Prado Júnior, los gastos anuales medios relativos a la exportación de capital fueron, en el período 1949-1953, de casi 3.000 millones de cruzeiros, suma sólo superada por la exportación de café y muy superior a la que se gastó en la importación de equipos mecánicos y vehículos motorizados, que constituyen suplementos esenciales para la economía.² Como la remuneración del capital extranjero sólo puede cubrirse normalmente con los recursos de la exportación, y de hecho se asistía a una crisis de la exportación, era evidente la interacción de esos dos elementos: del sector externo y sus repercusiones sobre los intereses de la industria.

Las luchas políticas de 1954 reflejaron la agudización de esas contradicciones de la sociedad brasileña, que terminaron con una tregua y no con una solución. Tras la muerte de Vargas, efectivamente, se intentó un compromiso, entregándose la Presidencia de la República a Café Filho, vicepresidente cuya candidatura fue presentada por el Partido Socialista al mismo tiempo que se le rodeaba de un ministerio donde la derecha se encontraba muy bien representada. El importante Ministerio de Hacienda quedó en manos de Eugenio Gudin, abiertamente favorable a la más estrecha colaboración con el capital extranjero y contrario a todo programa intensivo de industrialización.

² Caio Prado Júnior, *História econômica do Brasil*, São Paulo, Brasiliense, 1959, p. 321.

Ese compromiso mostraba, en realidad, el callejón donde se encontraban las fuerzas brasileñas. El Gobierno abandonó los arrojados proyectos de Vargas para hacer lo que se llamó “un sondeo de la política económica para regresar a su modelo convencional, preocupada por la estabilidad, mediante la contención de la demanda global”.³ Hasta 1956, ninguna iniciativa importante capaz de alterar el equilibrio relativo que se establecía entre los grupos dominantes marcó la acción gubernamental, con excepción de la Instrucción 113 de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito, actual Banco Central.

Esa Instrucción, sin alterar el sistema cambiario vigente, daba facilidades excepcionales al ingreso de capitales extranjeros, en la medida en que permitía que las máquinas y los equipos introducidos al país por empresas extranjeras no tuvieran cobertura cambiaria, exigencia que se mantenía para las empresas nacionales. Bajo la vigencia de esa norma, combinada con la Ley 2.145/54, es decir, entre 1955 y 1961, el importe total de capitales extranjeros, que bajo la forma de financiamientos o inversiones directas entraron en el país, fue de unos 2.300 millones de dólares. Hecho que, como veremos, no podía dejar de tener influencia sobre el equilibrio social y político existente.

Por este medio, la burguesía industrial tomaba una posición frente a la crisis que había surgido en el sector externo. Agobiada por la escasez de divisas, que amenazaba con un colapso de todo el sistema industrial, la burguesía aceptaba el suministro, por parte de los grupos extranjeros, de divisas necesarias para la superación de esa crisis, concediéndoles a cambio una amplia libertad de ingreso y de acción, y renunciando, por lo tanto, a la política nacionalista que se había esbozado con Vargas. Las condiciones especiales de la economía norteamericana, que más que nunca necesitada de nuevos campos de inversión, garantizaban el acuerdo.

³ Centro de Desarrollo Económico CEPAL-Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, *15 anos de política econômica do Brasil*, 1964, mimeo, p. 16.

LATIFUNDIO CONTRA INDUSTRIA

Es evidente que ese acuerdo no fue firmado mientras “se tomaba el té”. En noviembre de 1955, tras una tentativa de la derecha para quedarse sola en el poder, se verificó lo que se llamó, con un eufemismo, el *contragolpe del 11 de noviembre*, bajo el mando del ministro de Guerra, mariscal Teixeira Lott. Se aseguró, así, la toma de posesión, en la Presidencia y Vicepresidencia de la República, de los candidatos elegidos en octubre por la coalición del Partido Social Demócrata y el Partido Laborista: Juscelino Kubitschek, ex gobernador de Minas Gerais, y João Goulart.

Desde el primer año de su gobierno, en 1956, el nuevo presidente lanzó un ambicioso programa de desarrollo económico —el Plan de Metas—, cuya aplicación empezó al año siguiente. Aunque contaba con facilidades arancelarias y estímulos fiscales a la iniciativa privada, el Plan se respaldaba, principalmente, en las inversiones públicas en sectores básicos y en los ingresos de capital extranjero. Para mantener el ritmo previsto se hacía necesaria una inversión monetaria importante en las obras públicas y en la construcción civil; Kubitschek prefirió concentrarlas, *ad suam majorem gloriam*, en la edificación de una nueva capital: Brasilia.

La expansión económica que se logró fue apreciable; pero para comprender cómo evolucionaron las relaciones de clase hay que examinar las condiciones en que se produjo. Un primer punto que se debe destacar es la participación del capital extranjero. Dijimos que el total de inversiones y financiación de origen externo suma casi 2.500 millones de dólares para el período, lo que indica un refuerzo considerable de la posición de los grupos extranjeros en la economía brasileña. Las formas específicas que asume ese refuerzo se pueden imaginar si señalamos que casi la totalidad de esa suma se destinó a las actividades infraestructurales y a la industria ligera y pesada, y si se considera que grandes partes, difíciles de estimar, de esos capitales vinieron asociados a empresas nacionales; al proceder de esa manera se aprovecharon de la facilidad creada por la Instrucción 113 para la importación

de equipos sin cobertura cambiaría. Es natural, por lo tanto, que en virtud del crecimiento de la intervención del factor extranjero en la economía, y de los lazos que el mecanismo de la asociación estableció entre este sector y el nacional, creciera la influencia de los grupos económicos internacionales en la sociedad política brasileña.

Otra consecuencia tendrá la ampliación en la intervención del sector extranjero, y será su repercusión sobre las relaciones existentes entre el sector industrial y el agroexportador. Efectivamente, el deterioro de la situación económica de este último, que ya señalamos, no correspondió a la depreciación de su fuerza política. Esto no se debió tan sólo a la firme posición que ocupaba en la estructura política ni al dominio que ejercía sobre la masa campesina, decisivo en el juego electoral, sino también a la dependencia en que se encontraba todavía la industria en relación con la exportación, fuente de divisas para sus importaciones, dependencia que la extensión del sector extranjero vino a acentuar:

[...] los beneficios obtenidos por las empresas imperialistas en Brasil sólo se pueden liquidar (y sólo entonces constituirán para ellos verdaderos lucros) con los saldos de nuestro comercio exterior, por ser de la exportación de donde proceden nuestros recursos en moneda extranjera. Descontada la parte de esos recursos que se destinen a pagar las importaciones, es del saldo restante, y solamente de él, de donde podrá salir el beneficio de las inversiones hechas aquí por los *trusts*.⁴

Esta observación tiene implicaciones seguras en el análisis de las relaciones de clase, tal como se desarrollaron en ese período. Es de hecho evidente que la tregua que se estableció entre los grupos industriales y agroexportadores en la fase de ejecución del Plan de Metas terminó por traducirse en un incremento de su solidaridad mutua, gracias a la influencia del capital extranjero

⁴ Caio Prado Júnior, *História econômica do Brasil*, op. cit., p. 325.

invertido en la industria, al que le importa mucho más el aumento de las ganancias de la exportación. Se comprende así que en el proceso de intensiva capitalización que representó el período de Kubitschek, la industria haya permitido, sin protestar, que una buena parte del aumento de la productividad urbana fuera transferida hacia el sector agroexportador, por mediación de la mecánica de los precios,⁵ como incentivo a las actividades de este sector, y que igualmente haya aceptado la política de almacenamiento del café, destinada a sostener los precios internacionales del producto, que entre 1954 y 1960 absorbió nada menos que 147.000 millones de cruzeiros, correspondientes a un promedio anual de 1,32% del producto nacional bruto.⁶

Pero si la contradicción entre los sectores industrial y agroexportador tendía a disminuir, otra oposición, nueva en cierta manera, hacía su aparición en la economía brasileña. El examen del cuadro de los precios de intercambio entre los productos agrícolas e industriales no muestra tan sólo una transferencia de renta urbana hacia la agricultura en general, sino, en particular, una fuerte transferencia hacia la agricultura que produce para el mercado interno.⁷ Si se considera que, en el período 1955-1960 en que se acentúa esa tendencia, la tasa de expansión de la producción agrícola para el mercado interno disminuye (pasando de 4,9% en el período 1947-1954 a 4,3% en 1955-1960), mientras se eleva la tasa anual de crecimiento industrial (de 8,8% a 10,4% en los períodos considerados), se concluirá que la aceleración de

⁵ Los precios agrícolas globales pasaron del índice 222,6 en 1954 a 686,3 en 1960, mientras el índice de los precios industriales progresó de 204,2 a apenas 462,4 en los años considerados (1949 = 100). Presidencia de la República de Brasil, *Síntesis del Plan Trienal de Desarrollo*, diciembre de 1962, p. 126.

⁶ Centro de Desarrollo Económico CEPAL-Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, *15 años de política económica do Brasil*, op. cit., p. 66.

⁷ Si el índice relativo de los precios agrícolas en general y los precios industriales, tomando como base a 1949, pasa de 118,8 en 1955 a 148,4 en 1960, el de los precios del producto agrícola para el mercado interno se eleva de 109 a 147,6 en los años considerados, presentando, pues, una progresión más rápida. Presidencia de la República de Brasil, *Síntesis del Plan Trienal de Desarrollo*, op. cit., p. 126.

la transferencia de rendimientos relativos a la productividad urbana hacia el campo se debe, básicamente, a una rigidez relativa de la oferta de bienes agrícolas, frente a una demanda urbana creciente.⁸

La causa fundamental de esa rigidez no ha de buscarse muy lejos:

Todos los estudios e investigaciones sobre las causas del atraso relativo de la agricultura brasileña, de su baja productividad y de la pobreza de las poblaciones rurales conducen, unánime e inevitablemente, a la identificación de sus orígenes en la deficiente estructura agraria del país [dirá el gobierno de Goulart, al lanzar su Plan Trienal de Desarrollo, subrayando:] El rasgo característico de esa estructura agraria arcaica y superada, que está en conflicto peligroso con las necesidades sociales y materiales de la población brasileña, es la absurda y antieconómica distribución de las tierras.⁹

Esa estructura, que deja en manos de menos del 26% de los propietarios más de la mitad de las tierras, mientras adjudica el 10% de éstas al 75% de la población activa rural en condiciones de muy baja productividad, reduce a la mayoría de los campesinos a una situación permanente de subempleo y de miseria, y permite, además, que a través del arrendamiento de la tierra, toda la riqueza producida en el sector agrícola se la apropie una minoría de terratenientes.

Tal estructura es un obstáculo a la ampliación del mercado interno para los productos industriales. Por lo tanto, en un momento en que las inversiones extranjeras en la industria tienden a minimizar el divorcio creciente entre los intereses industriales y los del sector agroexportador, la oposición entre la industria y la agricultura para el mercado interno agrava globalmente la contradicción existente entre el sector industrial y el sector agrícola. La consecuencia es el planteamiento cada vez más urgente de la reforma agraria.

⁸ *Ibid.*, p. 127.

⁹ *Ibid.*, pp. 140-141.

Esta verdad será aún más evidente cuando, hacia 1960, declinan los ingresos de capital extranjero, al mismo tiempo que, pasado el período de maduración de las inversiones, los grupos internacionales vuelvan a presionar sobre la balanza de pagos para exportar sus beneficios. En ese momento —grave por la tendencia a la baja de los precios de exportación— la expansión industrial brasileña se verá contenida de dos maneras: desde el exterior por la crisis de la balanza de pagos, que no deja otra alternativa que devaluar la moneda, lo cual dificulta todavía más las importaciones esenciales, o contener la exportación de beneficios y ampliar el mercado internacional para los productos brasileños; y desde el interior, por el agotamiento del mercado para los productos industriales, mercado que sólo podrá ampliarse a través de la estructura agraria. Ahí se funda, desde el punto de vista de la burguesía industrial, el binomio *política externa independiente/reforma agraria*, que dominará el debate político a partir de 1960. De manera general, este dilema es el mismo que se presentó hacia los años 1953-1954 y que desencadenó la crisis política colmada por el suicidio de Vargas. Se podría decir, entonces, que con ayuda sobre todo de la Instrucción 113 se logró superar la crisis sin solucionarla, y que su aplazamiento sólo condujo a que volviera a presentarse con mayor violencia. Aquí es donde debemos verificar el comportamiento de factores que, teniendo todavía un papel secundario en la crisis de 1954, habían continuado desarrollándose.

LA ESCISIÓN HORIZONTAL

Dijimos que, gracias sobre todo al alquiler de la tierra, la estructura agraria brasileña permite el drenaje de toda la riqueza producida en el campo hacia una minoría de grandes propietarios. Más grave es que cualquier cambio tecnológico introducido en el trabajo agrícola, como la utilización de equipos y fertilizantes producidos por la industria, no se refleja en una mejora real de la situación del campesino. Por el contrario, es fuente de desempleo, y fuerza al trabajador rural a huir a las ciudades, donde, por

una parte, se sumará al triste cuadro de las *favelas* cariocas, de los *mocambos* de Recife, de las *ciudades satélite* de Brasilia, y, por otra parte, contribuirá a envilecer el nivel de los salarios urbanos por el aumento de la oferta de mano de obra. Además, mientras la introducción de la tecnología en la agricultura aumenta el nivel de la productividad (el producto, por persona ocupada en la agricultura, subió de 100 en 1950 a 127,7 en 1960), esa estructura impide que esas ganancias vayan al trabajador, con lo cual; el aumento de la productividad tan sólo pasa a significar una intensificación de la explotación del trabajo.

Es natural, pues, que en la segunda mitad de la década de los cincuenta se agudizasen las luchas en el campo por la posesión de la tierra. En 1958 surge en Galilea, Pernambuco, la primera liga campesina bajo el liderazgo de Francisco Julião. El movimiento se amplía rápidamente y en poco tiempo se desborda hacia el noreste, y llega al sur, sobre todo al viejo y oligárquico estado de Minas Gerais. Mera asociación de autodefensa y solidaridad al principio, las ligas campesinas no tardan en situarse en el escenario político con una bandera arrancada de las manos a las clases dominantes: la reforma agraria radical. El Congreso Nacional de los Campesinos, efectuado en 1961 en Belo Horizonte, con una representación de más de mil líderes rurales de todo el país, expresa la afirmación definitiva del movimiento campesino. La reforma agraria dejaba de ser un tema de discusión de los expertos y se convertía en uno de los factores más importantes de la lucha de masas en Brasil.

De una manera más sutil, la cuestión agraria influiría también sobre el movimiento de masas en la ciudad. Supliendo constantemente con sus excedentes el mercado urbano de trabajo, la estructura agraria brasileña contribuía a que el nivel de los salarios se mantuviera estacionario, al mismo tiempo que, por el aumento desproporcionado de los precios agrícolas, forzaba violentamente el alza del costo de la vida. El fenómeno afectaba también a la clase media asalariada, cuyos ingresos estuvieron siempre en función del salario mínimo obrero.

Esta tendencia era reforzada por la política general del Gobierno, y se constituía en una necesidad del programa de industrialización, que dependía de una intensificación del proceso de acumulación de capital.

Durante el período del Plan de Metas [dice un estudio del Centro de Desarrollo Económico CEPAL-BNDE] se procuró mantener constantes los salarios nominales, resistiéndose a la concesión de reajustes y facilitándose la captación de ahorros forzados de los sectores de ingresos contractuales. [Y añade:] Es evidente que el factor mayor para el éxito de esa política fue la presencia de una oferta flexible de mano de obra sin un elevado grado de organización sindical... [siendo el] comportamiento salarial de indiscutible importancia en la obtención de altas tasas de inversión.¹⁰

Gracias a este expediente fue posible contener de manera relativa las presiones inflacionarias en esta fase de intenso desarrollo económico, de tal manera que la tasa de inflación, que fuera de 14,9% en 1953, no fue más allá del promedio de 22,7% en el período 1957-1959. Desde 1959, sin embargo, un factor perturbador interviene en el comportamiento de la economía, representado por la ascensión espectacular de los movimientos reivindicativos de la clase obrera, que presionó para detener la caída del poder de compra de los salarios. La razón directa de esta tendencia puede buscarse en la elevación brusca del costo de vida, determinada principalmente por el alza de los precios de los productos alimenticios, que se volvió sensible a partir de ese año.

Esa elevación del costo de vida coincide con la aceleración del grado de organización sindical de la clase obrera. En efecto, mientras crecían por la industrialización los efectivos del ejército obrero, los sindicatos pasaron a buscar fórmulas para superar los obstáculos a su acción común, que derivaban de la legislación heredada del *Estado Novo*: en la imposibilidad inmediata de formar

¹⁰ Centro de Desarrollo Económico CEPAL-Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, *15 anos de política econômica do Brasil, op. cit.*, p. 63.

una directiva única, los *pactos de acción conjunta* les permitieron coordinar sus actividades. Eso fue sensible especialmente en los trabajadores de las empresas estatales o paraestatales —como Petrobrás, los ferrocarriles y las administraciones de los puertos—, cuya importancia económica y estratégica les proporcionaba mayor poder de discusión. La llamada *huelga de la paridad*, que hacia fines de 1960 reunió en Río de Janeiro a los portuarios, estibadores y marítimos con el apoyo de otras categorías, fue una demostración de fuerza del movimiento obrero, cuya importancia estriba en que no le fue posible al Gobierno detenerla mediante el manejo de los *pelegos* al servicio del Ministerio del Trabajo.

La consecuencia es que la curva de los salarios, que después de un período estacionario presentó una tendencia al descenso desde 1956, a partir de 1961 muestra una ligera recuperación. Al intento de las clases empresariales de contestar a la presión sindical con nuevos aumentos de precios (el costo de vida subió de 24% en 1960 a 81% en 1963), la clase obrera responde con la obtención de reajustes salariales. Eso se ve cuando se considera que el salario mínimo urbano, en el período 1955-1960, se mantuvo estable por un promedio de 25 meses, y se reajustó todos los años, después de 1961, y cada seis meses a partir de 1963.

Normalmente la inflación es un mecanismo por el cual las clases dominantes de una sociedad buscan mejorar su participación en el monto de las riquezas producidas. En el Brasil de los sesenta, su aceleración indicaba una lucha entre precios y salarios que sólo significaba que la inflación, como instrumento de acumulación de capital, dejaba de ser eficaz. Era imposible continuar financiando la industrialización mediante ahorros forzados, cuando se tenía el nivel de vida popular comprimido al máximo (gracias a la erosión constante a que habían estado sometidos los salarios) y un movimiento sindical en mejores condiciones para defenderse. Paralelamente a la disputa entre las clases dominantes por las ganancias originadas en el aumento de la productividad (que mostramos al tratar de la relación entre precios industriales y agrícolas), esas clases tenían que enfrentarse ahora con la resistencia opuesta por las masas populares. Inútilmente la tasa de

inflación saltó de 25% en 1960 a 43% en 1961, a 55% en 1962 y a 81% en 1963; de ser un mecanismo de distribución de la renta en favor de las clases dominantes, el proceso inflacionario se convirtió en una lucha a muerte entre todas las clases de la sociedad brasileña con miras a asegurar su propia supervivencia, y no podría terminar de otra manera sino poniendo a esa sociedad frente a la necesidad de una solución de fuerza.

El desarrollo económico que el país experimentó desde la segunda década del siglo lo había conducido a una crisis que se había podido contornear, en 1954, gracias al insuficiente grado de agudización de las contradicciones que contenía. En los primeros años de la década de los sesenta, sin embargo, tales contradicciones asumían un carácter mucho más grave, no solamente desde el punto de vista de las relaciones externas, como pretenden muchos, sino también desde las oposiciones que se habían desarrollado en el interior mismo de la sociedad. A la escisión vertical que en 1954 oponía a la burguesía industrial, al sector agroexportador y a los grupos extranjeros, se sumaba ahora horizontalmente la oposición entre las clases dominantes como un todo, y las masas trabajadoras de la ciudad y del campo.

EL BONAPARTISMO DE QUADROS

Desde el comienzo del período 1961-1964 el país presenció tres intentos de implantar un gobierno fuerte, tentativas que se basaron en diferentes coaliciones de clase y que reflejaron, en último término, la correlación real de fuerzas en la sociedad brasileña. La primera concretada en el gobierno de Janio Quadros, quien sucedió por vía electoral a Juscelino Kubitschek, representó un bonapartismo carismático, ungido de legalidad y teñido de progresismo en grado suficiente para obtener la adhesión de las masas, al mismo tiempo que lo bastante liberado de compromisos partidarios para que, en nombre del interés nacional, pudiese arbitrar los conflictos de clase. A pesar de no pertenecer a los cuadros del principal partido que lo apoyó —la Unión Democrática Nacional—, y siendo por su naturaleza contrario a la actuación

política basada en fuerzas organizadas, Quadros era aún más indicado para ese papel en virtud de la ambigüedad que había marcado su llegada al poder: un candidato de la derecha que lograría una enorme penetración popular gracias a los temas *estabilidad monetaria, reformas estructurales, política externa independiente* en que centró su campaña electoral.

Declarado presidente, se rodeó de un ministerio conservador e inexpressivo y dejó claro desde el principio que gobernaría solo, pues sus ministros eran solamente secretarios particulares. Su primera medida de gobierno fue aplastar violentamente, incluso moviendo una parte de la *escuadra*,¹¹ una huelga estudiantil sin importancia surgida en Recife. En lo sucesivo su comportamiento fue el de un déspota; se mostraba despectivo frente a cualquier tipo de presión y no ocultaba un soberano desprecio por los sindicatos, las directivas estudiantiles, los órganos patronales, los partidos políticos..., en fin, por cualquier forma de organización.

Su iniciativa más notable fue la reformulación general del esquema cambiario. Por medio de la Instrucción 204 de la SUMOC,¹² y su complemento, quedó abolido el sistema adoptado en 1953, extinción que alcanzaba a todos los regímenes establecidos bajo tal sistema, incluso la Instrucción 113. El nuevo esquema cambiario creaba un solo mercado para las importaciones y exportaciones, donde la tasa de cambio se fijaba libremente, dejando así de ser uno de los instrumentos primordiales de la política económica. El Gobierno sustituyó ese instrumento por la tributación interna sobre las importaciones y exportaciones, por la utilización de cuotas de retención de los beneficios y por la emisión de bonos de importación. Aumentaba de este modo la disponibilidad del tesoro público, al mismo tiempo que beneficiaba las exportaciones, gracias a la devaluación monetaria provocada por la Instrucción 204.

La nueva política cambiaria fue considerada por amplios sectores de la izquierda como una capitulación de Quadros frente a

¹¹ Con este término el autor se refiere al ejército o policía militar (*N. del E.*).

¹² Superintendencia de la Moneda y el Crédito (*N. del E.*).

los intereses del sector agroexportador y de los grupos extranjeros, expresados estos por el Fondo Monetario Internacional. Esto nos parece una simplificación. Es significativo, en efecto, que los grandes grupos económicos, sean de la industria o de la agricultura y comercio de exportación —en una palabra, la economía de São Paulo— aplaudiesen las directrices gubernamentales. Pero la oposición partió, sobre todo, de los productores de café de tipo inferior, principalmente los del estado de Paraná, y de los grupos comerciales a ellos ligados, cuya actividad antieconómica fue sancionada por Quadros mediante la tributación diferencial. También se opusieron los sectores industriales que se encontraban en situación económica difícil o que estaban todavía en fase de implantación —por lo tanto, necesitados de los privilegios concedidos por el antiguo sistema cambiario—, que tienen su mejor ejemplo en la industria textil de todo el país y en la joven siderurgia de Minas Gerais.

La liberación de los cambios tenía, pues, un doble objetivo: desahogar al sector externo abriendo perspectivas para superar la grave crisis en que vivía, ampliar al mismo tiempo los recursos del Estado para atender los compromisos de la deuda exterior y permitir, con un mayor liberalismo económico, que la economía interna marchase hacia una “racionalización”, es decir, eliminar los sectores considerados antieconómicos o todavía incapaces de enfrentarse a la competencia. No es necesaria mucha perspicacia para ver que eso libraba a las empresas medias y pequeñas al apetito de los grandes grupos económicos.

La misma tendencia se manifestó en la política relativa al capital extranjero. Anulando los privilegios que había tenido hasta entonces, la Instrucción 204 no establecía limitación alguna a su actividad. El proyecto de ley presentado al Congreso por el Gobierno, en el que se proponía reglamentar la exportación de beneficios, se basaba, a su vez, en métodos liberales, principalmente la tributación. Ningún límite cuantitativo se planteaba allí a la exportación de beneficios y tan sólo se ofrecían ventajas fiscales a aquellos que reinvirtieran en el país.

Simultáneamente, el Gobierno trató de aliviar al sector externo en otras direcciones: primero, negociando la recomposición de la deuda externa, mientras gestionaba la obtención de nuevos créditos en Estados Unidos y en Europa y, un poco más tarde, también en los países socialistas; segundo, planteando la reformulación del comercio exterior con objeto de ampliar el mercado para las exportaciones tradicionales, pero también con el de diversificar las exportaciones con la inclusión de productos manufacturados.

Es natural, pues, que la diplomacia brasileña presentase cambios sensibles. Quadros inició conversaciones para normalizar las relaciones con los países socialistas, en especial con la Unión Soviética (interrumpidas desde 1947); envió una misión comercial a China encabezada por el vicepresidente Goulart; inició una activa política africana abriendo nuevas embajadas y consulados, y enviando misiones comerciales a los jóvenes países de África, y esbozó, también, una nueva política en relación con Latinoamérica.

En este campo la cuestión cubana desempeñó un papel importante. Manifestando siempre su simpatía por la revolución de Castro, Quadros reprobó abiertamente el intento de invasión de 1961 y definió su posición: el pueblo cubano tiene derecho a autodeterminarse, y hay que impedir que, con motivo de la cuestión cubana, los países latinoamericanos se conviertan en mero juguete en el conflicto norteamericano-soviético. La única solución es la constitución de un bloque autónomo que sirva de contrapeso a la influencia norteamericana y permita a Latinoamérica solucionar libremente sus problemas. Este bloque, en las condiciones vigentes en 1961, tendría por eje a Brasil y Argentina. En abril de ese año, en Uruguai, en la frontera brasileño-argentina, Quadros y Frondizi se pusieron de acuerdo sobre esas cuestiones.

La política exterior apareció como la faz más espectacular del gobierno de Quadros, quien la utilizó conscientemente para solucionar no sólo el problema de mercado que apremiaba a la economía brasileña, sino el de los créditos externos que se necesitaban. Esto permitió a Brasil sentarse como una de las estrellas

en la Conferencia de Punta del Este en agosto de 1961, de donde saldría la Alianza para el Progreso. Decidiendo enviar un diplomático de alto rango a la conferencia neutralista de Belgrado, fijada para septiembre; condecorando al ministro cubano Ernesto *Che* Guevara; estableciendo una correspondencia personal con el premier soviético Jrushev en la que se planteaba abiertamente la posibilidad de ayuda económica a Brasil, y preparando cuidadosamente la delegación brasileña que participaría en la sesión anual de las Naciones Unidas, Quadros mostraba que evolucionaba cada vez más hacia una posición de autonomía en el plano internacional, dispuesto a aprovecharse, al estilo nasserista, de las ventajas que eso podía proporcionarle.

En el interior, esa política externa rendía también sus dividendos. El respaldo unánime que le daba el pueblo y la importancia que las cuestiones internacionales asumían en el debate político permitían a Quadros hacer olvidar los sacrificios que su política económica representaba para las capas menos favorecidas. Es natural que la contención de las emisiones monetarias, la supresión de los subsidios a bienes esenciales de importación (como el trigo y el petróleo) y la libertad cambiaria se manifestaban en la elevación del costo de vida. Quadros no parecía inclinado, sin embargo, a permitir un aumento correlativo de los salarios. Desdeñando la presión de los sindicatos y la oposición parlamentaria, convocaba a la nación al sacrificio de una “política de austeridad”.

Por otra parte, atacaba los problemas estructurales internos, sobre todo el agrario, con medidas de efecto inmediato, mientras exigía del Congreso una reforma global. Al establecimiento de una política de precios mínimos, favorables al agricultor medio y pequeño, siguió la creación del *crédito rural móvil*, suministrado sin dificultades burocráticas por unidades volantes del Banco del Brasil. Con eso hería hondamente la estructura del dominio de los latifundistas y especuladores comerciales sobre los campesinos, estructura que se apoyaba principalmente en la fijación de precios a la producción y en el agio.

Abriendo tantos frentes, que despertaban el descontento de los más distintos sectores, desde los comunistas hasta los de extre-

ma derecha, Quadros se escudaba sólo en su fuerza personal, no preocupándose nunca de resguardarse en un dispositivo político, popular y militar propio. Cuando, después de dos o tres ataques de Lacerda, renunció sorpresivamente a la Presidencia el 25 de agosto de 1961, su prestigio popular llegaba a la cima y nada parecía, en verdad, amenazar su posición. ¿Qué había pasado?

Se admite que, al desafiarle, Lacerda estaba respaldado por los ministros militares y cubierto por grupos patronales insatisfechos con la política de Quadros. Cuando éste trató de impedir que Lacerda hablase por la televisión el 24 de agosto, los jefes militares se negaron a cumplir sus órdenes. Se le forzaba, así, a arreglarse con la derecha o a declararle la guerra, y su renuncia fue una estrategia para eludir ese dilema. Quadros tenía conciencia de su fuerza política, confirmada por el hecho de que la derecha no osaba atacarlo de frente, limitándose a intentar contenerlo. La circunstancia de encontrarse sin sucesor legal (porque al renunciar, el vicepresidente Goulart estaba en China), llevaría al país al caos, pues, en cualquier hipótesis, Quadros se sentía seguro de que la derecha le prefería mil veces más a él que a Goulart. Renunciando (proceso que empleó con éxito durante la campaña electoral para doblegar a la UDN), esperaba volver al poder en brazos del pueblo, con lo que dispondría de una fuerza tal que ya nadie —ni el Congreso, ni los partidos, ni los militares— podría enfrentársele. Si las articulaciones de la derecha, bajo el liderazgo de Lacerda, permiten, pues, que se hable de una tentativa de golpe, la respuesta de Quadros, con su renuncia, era también de un gesto *golpista*, y ambas se inscriben en la tendencia hacia el gobierno de fuerza que caracterizaba a la política brasileña.

GOULART Y LA COLABORACIÓN DE CLASES

Los acontecimientos que siguieron confirmaron y desmintieron, al mismo tiempo, las esperanzas de Quadros. Tenía razón al creer que su renuncia llevaría al país al borde de la guerra civil, pero se engañaba al pensar que el movimiento popular le restituiría el poder. Contrario de lo que le dictaba su concepción carismática

y pequeñoburguesa de la política, el pueblo como tal no existe sino como fuerzas populares que se mueven siempre bajo la dirección de grupos organizados. La desconfianza que inspiraba a esas fuerzas hizo que ellas trataran de aprovechar a su manera el caos que su renuncia había creado. El pueblo, como esperaba Quadros, salió a las calles para enfrentarse a la derecha, pero no tomó su nombre como bandera y sí el de Goulart, mucho más ligado a las directivas de las masas.

Tras un intento fracasado de los ministros militares de Quadros para someter el país a la tutela militar —y que anunciaba lo que pasaría en 1964—, y gracias sobre todo a la resistencia opuesta por el gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola, el vicepresidente João Goulart asumió por fin la Presidencia, aunque en el marco de un compromiso que sustituía el régimen presidencial por el parlamentario. Se trataba, evidentemente, de una tregua. Muy pronto Goulart dejó claro que no aceptaría la situación, e inició una campaña cada vez más violenta de desmoralización del parlamentarismo. Por otra parte, si a nivel de la política externa se mantenía el dinamismo impreso por Quadros, en el plano interno entraba en una fase de relativo inmovilismo.

Es necesario observar que ese inmovilismo no era exclusivamente, ni siquiera principalmente, el resultado de la tregua parlamentaria, como Goulart y sus partidarios daban a entender, sino, por encima de todo, del estancamiento de la expansión industrial y del equilibrio a que habían llegado las tensiones sociales. En efecto, desde 1962 la tasa de inversiones declinó (señal segura de que había caído la tasa de beneficios), mientras, reforzados por la movilización provocada por la crisis de agosto, los movimientos reivindicativos de la clase obrera y de la pequeña burguesía se volvían cada vez más agresivos. Era evidente que la economía brasileña estaba en un callejón sin salida. La tregua política resultante de esa situación la agravaba, ya que no permitía a ninguna clase imponer una solución.

La fuerza de Goulart en el movimiento sindical llevó a la burguesía a depositar en él sus esperanzas de contenerlo y utilizarlo en su intento de constituir un gobierno fuerte, capaz de atacar a

los dos factores determinantes de la crisis económica (el sector externo y la cuestión agraria), para abrir así a la economía nuevas perspectivas de expansión. Es decir, se intentaría sustituir el liderazgo carismático de Quadros, basado en una concepción abstracta de la autoridad, por un liderazgo de masas sostenido por fuerzas organizadas y con una ideología definida. Esta tendencia se concretó por la actuación de Goulart, quien se movió en dos direcciones: poco a poco montó un dispositivo militar propio y reforzó su posición en el movimiento sindical. Data de esta fecha el surgimiento de un organismo nuevo que tendría gran repercusión en el equilibrio de las fuerzas políticas: el *Comando General de los Trabajadores* (CGT), cuya constitución era una superación de los obstáculos levantados por la legislación del *Estado Novo* para lograr la unificación del gobierno sindical. Apoyado por la fracción militar progresista y por el CGT, Goulart desarrolló la campaña de 1962, favorable al retorno al presidencialismo.

Lo que así resurgía en el panorama político brasileño era una forma de Frente Popular que Vargas había intentado, sin atreverse a concretarla, y que se convirtió posteriormente en una orientación estratégica del Partido Comunista. Bajo el liderazgo de Goulart, y con el fin de obtener “reformas de base”, ese amplio movimiento, valiéndose de la movilización militar y de dos huelgas generales (5 de julio y 14 de septiembre de 1962), doblegó la resistencia de los sectores reaccionarios del Congreso y logró la convocación de un plebiscito para decidir sobre la forma nacional de gobierno. El 6 de enero de 1963, por aplastante mayoría, el pueblo brasileño aprobó la derogación de la enmienda constitucional de 1961 y la devolución de los poderes presidenciales a Goulart. Parecía, finalmente, que la tendencia bonapartista que se esbozaba en el escenario político de la nación iba a concretarse y que vencería la tesis, preconizada por el PCB, de un gobierno de la burguesía industrial respaldado por la clase obrera.

La tarea fundamental del nuevo Gobierno era hacer frente a la situación económica, cuyo deterioro se manifestaba en dos índices: disminución de la tasa de crecimiento del producto nacional de 7,7% en 1961, a 5,5% en 1962 (con un aumento demográfico

de 3,1% al año), y elevación de la tasa de inflación de 37% en 1961 a 51% en 1962. En diciembre de 1962 Goulart dio a conocer su plan económico, el llamado Plan Trienal de Desarrollo (1963-1965). En líneas generales se trataba de un conjunto de medidas destinadas a reactivar el crecimiento económico y a promover progresivamente un regreso a la estabilidad monetaria. La palabra *desinflación*, que estuviera de moda en el período de Quadros, volvía a los periódicos y declaraciones oficiales.¹³ En este sentido, se preveía la reducción del 4% en los gastos gubernamentales y una reforma tributaria, medidas destinadas a reducir el déficit de más de 700.000 millones de cruzeiros a 300.000 millones, a lograr la renegociación de la deuda externa con el aplazamiento de los pagos, la disciplina del mercado interno de capitales, una contención relativa de los salarios y sueldos en proporción al aumento de la productividad, y, en consecuencia, la reducción del aumento del nivel general de los precios, de 50% en 1962 a 25% en 1963 y a 10% en 1965. Paralelamente, trazaba el Plan una serie de directrices para las reformas estructurales: administrativa, bancaria, fiscal y agraria.

El fracaso del Plan Trienal en el mismo año de 1963 no se debió, en última instancia, al hecho de que se trataba de una programación defectuosa, sino a la contradicción misma que se encontraba en la base del gobierno de Goulart. Nacido de un movimiento popular que se desplegó en agosto de 1961 y culminó con el plebiscito de 1963, ese gobierno tenía por misión, desde el punto de vista de la burguesía, restablecer las condiciones necesarias para asegurar la rentabilidad de las inversiones, es decir, detener la tendencia a la baja que acusaba la tasa de beneficios. A largo plazo eso significaba ampliar el mercado interno mediante una reforma agraria que, mientras no diera resultados, se compensaría con la ampliación del mercado externo buscado por la política exterior. A corto plazo, se trataba de disciplinar el mer-

¹³ La expresión *desinflación* se utilizó por primera vez en el período de Kubitschek, en el plan de estabilización financiera presentado por su ministro de Hacienda, Lucas Lopes, que no llegó a aplicarse. Véase Embajada de Brasil en Estados Unidos, *Survey of the Brazilian Economy*, Washington, 1958, p. 71.

cado existente conteniendo el movimiento reivindicativo de las clases asalariadas. Es decir que a pesar de su sello de gobierno popular, se le exigía a la administración de Goulart que tuviera una actuación impopular y reprimiera las reivindicaciones de las masas. Así, cuando, tras la protesta de los grupos independientes de izquierda y de los sindicatos, el PCB se vio forzado a condenar el Plan Trienal (el primer fruto de un gobierno que tenía todo su respaldo), no hacía, en verdad, sino confesar la imposibilidad de su *frente único* obrero-burgués. Esa condena, en efecto, tendría que hacerla el PCB, cualquiera que fuera el plan del Gobierno, ya que no son las fases cíclicas de depresión las más indicadas para que se establezca una colaboración de clases entre la burguesía y el proletariado.

LA RADICALIZACIÓN POLÍTICA

Otro factor contribuía a dificultar el tipo de alianza que Goulart y el PCB, cada uno por su lado, buscaban. El ascenso del movimiento de masas, que se advertía desde el fin del gobierno de Kubitschek y se aceleró con la crisis de agosto de 1961, se había reflejado en el plano político de modo perturbador. El movimiento de izquierda —que hasta 1960 se dividía entre el PC y el ala izquierda del nacionalismo— sufrió varios fraccionamientos desde 1961. En enero de ese año se constituyó la Organización Revolucionaria Marxista (más conocida como POLOP, en virtud de su órgano de divulgación *Política Operária*) que se propuso restablecer el carácter revolucionario del marxismo-leninismo que el PCB traicionaba. Esa ruptura del monopolio marxista, hasta entonces en manos del PCB (con excepción de la reducida fracción trotskista), era solamente una señal; en 1962 se produjo el cisma interno del Partido Comunista brasileño, entre su directiva y un grupo del Comité Central, constituyéndose los disidentes en un partido independiente, el PC de Brasil, con el periódico *Classe Operária* como su vocero. El mismo año, Francisco Julião, en su manifiesto de Ouro Preto, llamaba a la formación del Movimiento Radical Tiradentes (MRT) e iniciaba la publicación del periódico

Liga, pero en octubre se escindió del MRT. Surgió finalmente la Acción Popular, iniciativa de los católicos de izquierda, que tenía como vocero el periódico *Brasil Urgente*. Esa proliferación de organizaciones se completó con las corrientes que se formaron alrededor de líderes populares como Brizola y Miguel Arraes, gobernador de Pernambuco; y se encontraban en la cumbre del Frente de Movilización Popular, en Río de Janeiro, que reunía además a los principales organismos de masas, como el CGT, el Comando General de los Sargentos, la Unión Nacional de los Estudiantes, la Confederación de los Trabajadores Agrícolas, la Asociación de Marineros. En este parlamento de las izquierdas, el sector radical se oponía con una fuerza cada vez mayor al ala reformista, encabezada por el PCB, en lo que se refiere a la posición que debía asumirse frente al Gobierno.

El aumento de los movimientos de masas y la polarización que se efectuaba en su representación política repercutieron inmediatamente sobre las clases dominantes. Protestando contra la amenaza de reforma agraria, los latifundistas, bajo la dirección de la Sociedad Rural Brasileña, empezaron a armar milicias. Formaciones urbanas del mismo tipo (como el Grupo de Acción Patriótica —dirigido por el almirante Heck, uno de los ministros militares de Quadros—, las Milicias Anticomunistas —vinculadas al gobernador Lacerda— y la Patrulla Auxiliar Brasileña, financiada por el gobernador de São Paulo, Ademar de Barros) hicieron su aparición, mientras los industriales de São Paulo y de Río de Janeiro formaban una “sociedad de estudios” —el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES)— que se destinaba a reunir fondos para la actuación contra el Gobierno.

La intervención norteamericana tampoco tardó en revelarse. Como declaró públicamente el subsecretario Thomas Mann, los créditos de la ALPRO, sin pasar por el gobierno federal, se dirigían a aquellos gobernadores “capaces de sostener la democracia”; sólo el gobernador Lacerda recibió, entre 1961 y 1963, 71 millones de dólares por esa vía. El embajador Lincoln Gordon desplegaba una actividad inmensa junto a las clases empresariales. Y un organismo directamente financiado por los grupos

extranjeros y —como denunció el gobierno de Goulart— por la Embajada de Estados Unidos, el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD), interfirió abiertamente en la vida política, sosteniendo a un grupo parlamentario (Acción Democrática Parlamentaria) y financiando, en las elecciones, a los candidatos de su preferencia.¹⁴

Esta movilización de las clases dominantes mostraba que el esquema burgués-popular, bajo el cual se formó el gobierno de Goulart, era impracticable. Frente a la intensificación de la lucha de clases (que la tasa de inflación relativa a 1963, de 81%, claramente expresa) y el estancamiento de la producción (aumento bruto de 2,1%, con las inversiones aún en recesión), la burguesía retiraba cada vez más su apoyo a Goulart y se dejaba ganar por el pánico difundido por los grupos reaccionarios. Además, como señalamos, la expansión del sector extranjero de la economía, su penetración intensiva en el campo industrial y su organización en el plan político a través de órganos como el IBAD, contribuían a diluir la resistencia burguesa. El fracaso de Goulart, al tratar de contener el movimiento reivindicatorio de las masas —el Plan Trienal se frustraría justamente por eso, más específicamente por el aumento de sueldos logrado por la burocracia pública en octubre de 1963— y la radicalización política, que llegaba ya a las Fuerzas Armadas (rebelión de los sargentos en Brasilia en septiembre de 1963), alejaron progresivamente a la burguesía de Goulart.

Ese divorcio se vio agravado por la polarización de las clases medias hacia la derecha. Sufriendo una violenta disminución en su nivel de vida, habiendo sucedido esto en medio de constantes huelgas del CGT y de los estudiantes, bajo un gobierno llamado de

¹⁴ Los gastos del IBAD en los comicios para gobernador de Pernambuco y su confraternización con los marinos rebeldes en 1962, mismo año en que apoyó al adversario de Miguel Arraes João Cleofas, representaron alrededor de 500 millones de cruzeiros, como comprobó la comisión parlamentaria que investigó la actuación de ese organismo. Sobre la intervención norteamericana en la política de Brasil en ese período, véase el informe periodístico de Robinson Rojas, *Estados Unidos en Brasil*, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 1965.

izquierda, las clases medias se hicieron cada vez más permeables a la propaganda que les presentaba las reivindicaciones obreras como el elemento determinante del alza del costo de la vida. A su vez, las huelgas sucesivas que paralizaban los transportes y demás servicios públicos, algo que afectaba directamente a las clases medias, les parecían a éstas una confirmación de que el país se encontraba al borde del caos, y las llevaron a aceptar la tesis de la derecha de que todo eso era un plan comunista. La intervención de la Iglesia católica precipitó esa tendencia. A través del *rosario en familia*, en todas las ciudades se realizaron concentraciones hogareñas anticomunistas. De ahí se pasó a las manifestaciones públicas, a las llamadas *marchas de la familia, con Dios, por la libertad*. En enero de 1964, con ocasión del Congreso Unitario de los Trabajadores de América Latina que se debía realizar en Belo Horizonte, la pequeña burguesía de allí salió a la calle azuzada por los latifundistas y los curas, y logró que el movimiento se transfiriera a Brasilia. Por primera vez, desde el “integralismo” fascista de los años treinta, la derecha movilizaba a las masas. Los conflictos populares entre grupos radicales se hicieron cada vez más frecuentes y violentos, y el país pasó a vivir un clima prerrevolucionario.

Goulart, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies, intentó volverse a la izquierda. Su mensaje anual al Congreso, en los primeros meses de 1964, constituía un ultimátum para la aprobación de las reformas de base. Luego emprendió la movilización popular. En el mitin del 13 de marzo que en Río de Janeiro reunió alrededor de 500.000 personas, dio a conocer al pueblo varios decretos, entre ellos el de la limitación de los alquileres urbanos, el de la nacionalización de las refinerías petroleras privadas y el de la incautación de las tierras situadas al borde de las carreteras. Allí, con los representantes del CGT, rodeado de los estudiantes y de los sargentos, al lado de Brizola y Arraes, y frente a las pancartas del PCB y demás organizaciones de izquierda, Goulart aceptaba la prueba de fuerza con la reacción. El 13 de marzo, las clases dominantes vieron a la izquierda unida anunciando el fin de una era.

Pero si la estrategia de Goulart fue buena para devolverle un año antes los poderes presidenciales, no lo era para hacerlo el dictador de un gobierno popular. Cuando la rebelión de los marinos, y su confraternización con los trabajadores del Sindicato de los Metalúrgicos de Río, quebró días después la disciplina militar y dio pretexto a la derecha para evocar a los soviets, su dispositivo de sustentación se escindió. La fracción militar le hizo saber que no lo seguiría apoyando si no disolvía el CGT y liquidaba las organizaciones de izquierda. Ceder ante los militares era convertirse en su prisionero, y un prisionero sin valor, puesto que Goulart no ignoraba que toda su fuerza política reposaba en el prestigio derivado de unirse a los sindicatos. Por otra parte, confiando siempre en que su triunfo dependía de la superioridad que tuviese en términos militares, Goulart no había creado las condiciones efectivas para una insurrección popular. El comportamiento de la mayoría de la izquierda, sobre todo del PCB, con su teoría de la revolución pacífica y su *cretinismo parlamentario*, tuvo el mismo efecto: desarmar a las masas.

El 2 de abril, alegando no querer derramar sangre, Goulart pasaba la frontera brasileño-uruguayo. La víspera se había constituido un gobierno provisional que, aunque ilegítimo (el presidente constitucional se encontraba todavía en Brasil), fue reconocido por Estados Unidos. Siete días después, las Fuerzas Armadas se adueñaban del poder proclamando el Acta Institucional, que suspendía prácticamente la Constitución.

LA INTERVENCIÓN MILITAR

El análisis de los hechos muestra claramente que no tienen razón quienes ven el actual régimen militar de Brasil como el resultado de una acción externa. El intento fracasado de 1961 dejó claramente expresado que una intervención militar sólo podría tener éxito si: a) correspondía a una situación objetiva de crisis de la sociedad brasileña, y b) se insertaba dentro del juego de las fuerzas políticas en conflicto. El respaldo que los militares recibieron de la pequeña burguesía, expresado en la “marcha de la

familia” que reunió, el 2 de abril de 1964, a un millón de manifestantes en Río de Janeiro, es señal evidente de que la acción de las Fuerzas Armadas correspondía a una realidad social objetiva. Otra confirmación es la adhesión unánime que recibieron de las clases dominantes.

Es necesario comprender que la escisión que se produjo en las clases medias y que bajo banderas extremistas opuestas las llevó a chocar violentamente en las calles en los primeros meses de 1964 (eso pasó sobre todo en Minas Gerais, de donde procedió el movimiento armado que derrocó a Goulart) indicaba claramente que las tensiones sociales habían llegado a un punto crítico. Tales tensiones oponían con fuerza creciente las clases dominantes, como un bloque, al proletariado, a las capas radicales de la pequeña burguesía urbana (de las que fue expresión el *brizolismo*) y a los campesinos y trabajadores rurales a causa de la agudización de las contradicciones que analizamos anteriormente.

Si se considera, en efecto, el modelo de las crisis políticas por las que pasó el país, se verá claramente que desde 1961 las fuerzas populares ganaban autonomía de acción y las crisis resultaban más difíciles de resolver por acuerdos palaciegos. En el *movimiento pro legalidad*, que se desplegó tras la renuncia de Quadros, todavía les fue posible a los grupos políticos dominantes encontrar una forma de transacción: el régimen parlamentario. Pero en las luchas subsecuentes por el restablecimiento del presidencialismo, si bien el mando estuvo siempre en manos de Goulart, hubo un momento (durante la huelga general de julio de 1962) en que casi se le escapó. Fue el pánico provocado por la amplitud de la huelga general de septiembre y el recuerdo de los disturbios sangrientos que se habían verificado en julio, en Río de Janeiro, los que, aliados al temor de una intervención militar pro Goulart, doblegaron la resistencia del Congreso.

La crisis de septiembre de 1963 presenta ya modalidades distintas. Su iniciativa no se origina en las esferas dominantes, como las anteriores, sino que pertenece a un sector específico del movimiento popular: los sargentos, cuya rebelión, en Brasilia, se halla en el origen de los acontecimientos. En ningún momen-

to Goulart pudo contener la acción autónoma de los sindicatos obreros y estudiantiles. La solución de la crisis, es decir, el rechazo por el Congreso de la declaración de Goulart que establecía el estado de sitio, tuvo como factor decisivo la movilización popular que se desarrolló en todo el país. Tal demostración de fuerza del movimiento popular, y una prueba tal de debilidad de Goulart, convencieron a la burguesía de que la esperanza de que éste pudiera ofrecerle una garantía de “paz social”, gracias al control que ejerció siempre sobre los organismos de masas, era vana. El fracaso subsecuente del Plan Trienal reforzó esa desilusión. Fue entonces cuando la burguesía abandonó a Goulart y cuando las aspiraciones que tuvo de lograr con él un gobierno bonapartista actuaron en beneficio de la derecha.

Naturalmente, no es solamente el recelo que inspiraba el movimiento de masas lo que contribuyó a aproximar la burguesía a las demás clases dominantes y a fundirlas en un bloque. Indicamos ya que la crisis económica visible desde 1962 no favorecía la alianza de la burguesía con las clases populares, sobre todo con la clase obrera, por los sacrificios populares que aquella debería imponer al país. Desde el momento en que Goulart se mostró incapaz de realizar el milagro de esa alianza —y su viraje hacia la izquierda, en marzo de 1964, apenas confirmaba esa incapacidad—, la burguesía, siempre necesitada de un gobierno fuerte, tenía que contar con la derecha. Por otra parte, el cambio que desde 1955 se efectuó en el interior de la clase burguesa, con el aumento del sector vinculado al capital extranjero, hacía cada vez más posible ese arreglo entre los grupos dominantes.

Esto explica por qué la primera faz que mostró el gobierno militar fue la represión policíaca del movimiento de masas: la intervención en los sindicatos, la disolución de los órganos directivos populares (incluso el CGT), la persecución de los líderes obreros y campesinos, la supresión de mandatos y derechos políticos, la prisión y la tortura. Explica también la política económica de ese gobierno, que fue, ante todo, de contención de los salarios, de

restricción del crédito y del aumento de la carga tributaria.¹⁵ En líneas generales, la política de estabilización financiera del actual gobierno quiere crear una oferta de mano de obra más abundante, bajando así su precio, y al mismo tiempo “racionalizar” la economía liquidando la competencia excesiva que produjo en ciertos sectores la expansión industrial, y favoreciendo, por lo tanto, la concentración del capital en manos de los grupos más poderosos. Esto beneficia, por supuesto, a los grupos extranjeros, pero también a la gran burguesía nacional. Esa política representa un intento de resucitar las prácticas originadas por la Instrucción 113 con el objeto de superar la crisis del sector externo; pero obedece también a las exigencias planteadas por el propio desarrollo capitalista brasileño, como son la rebaja de los salarios y la racionalización de la producción.

El hecho de que la burguesía brasileña finalmente haya aceptado el papel de socio menor en su alianza con los capitales extranjeros y decidido intensificar la capitalización, rebajando aún más el nivel de vida popular y concentrando en sus manos el capital disperso en la burguesía pequeña y mediana, tiene serias implicaciones políticas. Para amplios sectores de la izquierda, el actual régimen militar representa el fracaso de una clase —la burguesía nacional— y de una política: el reformismo. Planteada así, en términos radicalmente antiburgueses, la lucha popular tiende a rehuir las soluciones legales y se inclina por la lucha armada. Es evidente que la concreción de esa tendencia depende de la evolución de la crisis en que se debate la economía brasileña.

Pero no sólo de la situación económica pueden valerse las izquierdas brasileñas para llevar a las masas al camino de la insurrección. El carácter *extranjero* del actual régimen militar puede ayudarlas considerablemente. En efecto, si bien rechazamos la

¹⁵ Es interesante observar que la política tributaria del gobierno de Castelo Branco se basó sobre todo en la hoja de salarios, y no en la capacidad de producción de las empresas: salario familiar, impuestos para educación y habitaciones populares, decimotercer salario, etc. Es decir, se incrementó principalmente la carga fiscal de las empresas tecnológicamente menos evolucionadas, que emplean más mano de obra y que corresponden, socialmente, a la mediana y pequeña burguesía.

interpretación simplista que quiere ver en el golpe de abril una acción exterior a la realidad brasileña, no pretendemos negar la existencia y la importancia de la influencia norteamericana en los acontecimientos, no sólo, como señalamos, por la actuación de la Embajada de Estados Unidos en Río de Janeiro y la de organismos como el IBAD, sino también por la política de vinculación de las Fuerzas Armadas de Brasil con la estrategia del Pentágono. El acuerdo militar entre los dos países (firmado en 1942 y ampliado en 1954), la estandarización de los armamentos (1955), la creación de organismos continentales, como el Colegio Interamericano de Defensa (1961), las misiones de instrucción y de entrenamiento, todo eso creó progresivamente una elite militar inclinada a enfocar los problemas brasileños desde la perspectiva de los intereses estratégicos de Estados Unidos. A través de un centro de irradiación (la Escuela Superior de Guerra, a la que perteneció Castelo Branco, así como otros jefes militares del actual régimen) se difundieron teorías como la de la *agresión comunista interna* y la de la *guerra revolucionaria*, creadas por los franceses en la campaña de Indochina. El espíritu de casta y el paternalismo que caracterizan a los militares latinoamericanos hicieron el resto y llevaron a las Fuerzas Armadas brasileñas a llenar el vacío de poder que se había creado.

El régimen militar que se implantó en abril de 1964 inauguró un nuevo estilo en la política exterior de Brasil, cuyo principal objetivo parece ser el de lograr una perfecta adecuación entre los intereses nacionales del país y la política de hegemonía mundial llevada a cabo por Estados Unidos. El examen de esa política exterior arroja una nueva luz en la interpretación de la problemática brasileña, y merece que le dediquemos un capítulo aparte.

2. IDEOLOGÍA Y PRAXIS DEL SUBIMPERIALISMO

La estrecha vinculación a Estados Unidos que, bajo el nombre de “política de interdependencia continental”, orientó a la diplomacia brasileña en el gobierno del mariscal Castelo Branco (1964-1967) ha contribuido a que se considerara al régimen militar bra-

sileño como un simple títere del Pentágono y del Departamento de Estado. En realidad esa política exterior tiene hondas raíces en la dinámica de la economía capitalista mundial y en la manera como Brasil se ve afectado por ella. En otras palabras, dicha política sólo puede analizarse a la luz de los cambios sufridos en la posguerra por la economía norteamericana, tanto internamente como en sus relaciones con los países periféricos a ella; y a la inversa, a la luz de las transformaciones por las que ha pasado la economía brasileña en las dos últimas décadas y su posición actual frente a Estados Unidos.

LA INTEGRACIÓN IMPERIALISTA

La progresión ascensional de la acumulación capitalista en la economía norteamericana y el proceso de trustización que como una constante se presentó allí en este siglo tienen por resultado la concentración siempre creciente de una riqueza cada vez más considerable. Si las inversiones en actividades productivas acompañasen el ritmo de crecimiento del excedente así obtenido, la estructura económica estallaría en crisis quizá más violentas que la de 1929, en virtud del mecanismo mismo que vincula el ciclo de coyuntura a la variación del capital constante. La política antiinflacionaria que de modo general se ha adoptado en Estados Unidos después de la guerra ha permitido contener el ímpetu del crecimiento económico y limitar el monto del excedente, sin lograr impedir, sin embargo, que éste siga muy por encima de las posibilidades existentes para su absorción. Resultan de ahí las sumas siempre más grandes destinadas a las inversiones improductivas, principalmente en la industria bélica y en los gastos de publicidad. Lo restante, que no ha podido esterilizarse de esa manera, se precipita hacia el mercado exterior, lo que convierte a la exportación de capitales en uno de los rasgos más característicos del imperialismo contemporáneo.¹⁶

¹⁶ Véase Paul Baran, "Crisis of Marxism?", en *Monthly Review*, Nueva York, octubre, 1958. Edición en español: "¿Crisis del marxismo?", en *Cuadernos de Pasado y Presente*, No. 3, Córdoba, s.f.

La lógica capitalista, que subordina la inversión a la expectativa de beneficio, lleva esos capitales a las regiones y sectores que parecen más prometedores. La consecuencia es, a través de la repatriación de capitales, un aumento suplementario del excedente que impulsa a nuevas inversiones en el exterior, con lo cual recomienza el ciclo en un nivel más alto. Se amplían así incesantemente las fronteras económicas norteamericanas, se intensifica la amalgama de intereses en los países en ellas contenidos y se vuelve cada vez más necesario que, bajo distintas maneras, el gobierno de Washington extienda más allá de los límites territoriales la protección que dispensa a sus nacionales.

A principios del siglo, el más prestigioso teórico marxista de entonces, Karl Kautsky, influenciado por el revisionismo bernsteiniano e impresionado por el proceso de trustización que desde las dos últimas décadas del siglo XIX caracterizaba a la economía capitalista, formuló su teoría del “superimperialismo”: tras la concentración progresiva del capital en un gigantesco trust mundial se podría esperar la centralización política correspondiente y una transición necesaria y pacífica al socialismo. En su prefacio a la obra de Bujarin *La economía mundial y el imperialismo*, que escribió en 1915, Lenin combate la teoría kautskyiana, aunque sin negar la tendencia integracionista presentada por el capitalismo mundial. Lo que pasará, advertía, es que tal tendencia se desarrollará en medio de contradicciones y conflictos que darán un impulso a la tendencia opuesta, antes que ella llegue a su culminación. La guerra de 1914 y la Revolución Rusa, la guerra mundial y los fenómenos que engendró —la formación del bloque socialista y los movimientos de liberación nacional— le dieron la razón.

Siempre es verdad, sin embargo, que la expansión del capitalismo mundial y la acentuación del proceso monopolista mantuvieron constante la tendencia integracionista, que se expresa hoy, de manera más evidente, en la intensificación de la exportación de capitales y en la subordinación tecnológica de los países más débiles. Otro marxista alemán, August Thalheimer, lo advirtió al

acuñar en la posguerra su categoría de la *cooperación antagónica*. En un momento en que la dominación norteamericana parecía incontrastable frente a la destrucción europea que siguió a la guerra mundial, Talheimer fue suficientemente lúcido para percibir que el proceso mismo de integración o cooperación, acentuándose, desarrollaría sus contradicciones internas.

Eso fue, sobre todo, verdadero en lo que se refiere a los demás países industrializados, los que, sometidos a la penetración de las inversiones norteamericanas, se volvieron a su vez centros de exportación de capitales y extendieron simultáneamente sus fronteras económicas, dentro del proceso ecuménico de la integración imperialista. Las tensiones que intervinieron entre esos varios centros integradores de desigual grandeza (como, por ejemplo, Francia y Estados Unidos), aunque no puedan, como en el pasado, llegar a la hostilidad abierta y tengan que mantenerse en el marco de la cooperación antagónica, obstaculizan el proceso de integración, abren fisuras en la estructura del mundo imperialista y actúan vigorosamente en beneficio de lo que tiende a destruir las bases mismas de esa estructura: los movimientos revolucionarios en los países subdesarrollados.

Hay que advertir, en efecto, que no es sólo en el nivel de las relaciones entre los países industrializados que el proceso de integración imperialista alienta su propia negación. Eso se da, principalmente, en el ámbito de las relaciones entre esos países y los pueblos colonizados, y allí reside, sin duda, el factor determinante que lo encamina hacia su frustración. La exportación de capitales y de tecnología en dirección a esas naciones impulsa, de hecho, el desarrollo de su sector industrial, contribuyendo a crear nuevas situaciones de conflicto desde dos puntos de vista, interno y externo, y a propiciar una crisis que altera las condiciones mismas en que se realiza esa industrialización.

Internamente, la industrialización se expresa, en un país rezagado, en la agudización de contradicciones sociales de varios tipos: entre los grupos industriales y los latifundistas-exportadores; entre la industria y la agricultura de mercado interno; entre los

grandes propietarios rurales y el campesinado; y entre los grupos empresariales y la clase obrera, así como la pequeña burguesía. La diversificación económica se acompaña, pues, de una complejidad cada vez mayor en las relaciones sociales, que opone, en primer término, los sectores de mercado interno a los de mercado externo y luego, en el corazón de ambos, a los grupos sociales que los constituyen. Ni siquiera el capital extranjero invertido en la economía puede sustraerse a esas contradicciones y presentarse como un bloque homogéneo: el que se invierte en las actividades de exportación (Anderson Clayton, United Fruit) no tiene exactamente los mismos intereses que el que se aplica en la producción industrial o agrícola para el mercado interno (industria automovilística, aparatos eléctricos domésticos, industria de enlatados), y reaccionarán de modo distinto, por ejemplo, en un proyecto de reforma agraria que signifique ampliación del mercado interno y cree en el campo mejores condiciones de trabajo y remuneración.

El hecho de que el proceso de diversificación social que resulta de la industrialización no se sincronice rigurosamente con el ritmo de la penetración imperialista conduce, por otra parte, a que se agraven los factores antagónicos entre la economía subdesarrollada y la economía dominante. Puede pasar —como sucedió, por ejemplo, en Brasil, entre los años 1930 y 1950— que el sector industrial nacional aumente de manera mucho más rápida que la desnacionalización económica resultante de las inversiones externas. Además de las disputas que surgen entonces entre los dos sectores en su lucha por el mercado interno, sus relaciones pueden agravarse cuando —una vez han alcanzado determinado nivel de industrialización— las necesidades crecientes de la importación choquen, en el terreno cambiario, con las presiones del sector extranjero para exportar sus beneficios, y con las distorsiones que la dominación imperialista impone a la estructura del comercio exterior.

La cuestión tiende a agravarse aún más por otra razón: la reducción del plazo de renovación del capital fijo en las economías avanzadas, como consecuencia del ritmo increíblemente rápido

de las innovaciones tecnológicas,¹⁷ hace que esas economías experimenten una necesidad apremiante de exportar sus equipos obsoletos a las naciones en fase de industrialización. El estrangulamiento cambiario que las prácticas comerciales y financieras de esas naciones provocan en su capacidad de importar contrarresta, empero, esa tendencia. La contradicción sólo puede superarse mediante la introducción de tales equipos en los países subdesarrollados bajo la forma de inversión directa de capital. La consecuencia de tal procedimiento es la aceleración del proceso de desnacionalización —por lo tanto de integración— al mismo tiempo en que allí se implanta un desnivel creciente entre el marco tecnológico y las necesidades de empleo para una población en explosión demográfica. La manera por la cual se procura, pues, superar el estrangulamiento cambiario implica, por los problemas resultantes, la agudización de las tensiones sociales internas, factor decisivo en los movimientos de liberación nacional.

La cooperación antagonica entre la burguesía de los países subdesarrollados y el imperialismo es conducida así a un punto crítico, que ya no le permite existir en su ambigüedad e impone una disyuntiva entre la cooperación, tendiendo a la integración, y el antagonismo, marchando hacia la ruptura. Es lo que pasó en Brasil en 1964, y nos conviene examinar el mecanismo de esa crisis, así como sus consecuencias.

LAS ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO CAPITALISTA BRASILEÑO

La crisis del sistema de exportación de Brasil, iniciada en los años treinta y claramente configurada al terminar la Guerra de Corea, lanza a la sociedad brasileña a un proceso de radicalización de sus contradicciones, que expresa la imposibilidad de que el desarrollo industrial siga procesándose dentro de los marcos semi-coloniales hasta entonces existentes. Esa imposibilidad se vuelve visible por la acción de dos limitaciones estructurales. La primera

¹⁷ Ernest Mandel, *Tratado de economía marxista*, México, Ediciones Era, 1969.

se manifiesta en la crisis del comercio exterior, donde se verifica una tendencia constante a la baja en los precios de los productos exportados y una incapacidad del principal mercado comprador —el norteamericano— para absorber las cantidades crecientes que necesita exportar la economía brasileña para atender a las importaciones necesarias para la industrialización. La segunda limitación se deriva del régimen de propiedad de las tierras, que estrangula la oferta de géneros alimenticios y materias primas requeridas por la industria y por el crecimiento demográfico urbano, lo que, además de impulsar hacia el alza los precios (que estimula, a su vez, los movimientos reivindicativos de masas), concentra los rendimientos de la agricultura en manos de una minoría y obstaculiza la expansión del mercado interno en lo que respecta a la producción industrial.

Los gobiernos de Café Filho y Juscelino Kubitschek, que suceden a la grave crisis política de 1954 producida por la situación descrita, y que se clausura con el suicidio del presidente Vargas, siendo ambos frutos del compromiso entre las clases dominantes en conflicto, tratarán de encontrar una fórmula de transacción que permita superar la crisis económica sin llevar a una confrontación definitiva de las posiciones implicadas. El recurso elegido es abrir la economía brasileña a los capitales norteamericanos a fin de romper el nudo formado en el sector cambiario. La Instrucción 113 de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito (actual Banco Central) crea el marco jurídico para esa política, que llega a su apogeo con el Plan de Metas del gobierno de Kubitschek, el cual acarrea alrededor de 2,5 millones de dólares en inversiones y financiamientos, y empuja de nuevo la expansión industrial.

Esa expansión empieza, sin embargo, a dar señales de agotamiento hacia 1960, en función de la disminución que se verifica en el nivel de los ingresos internos, de la caída del precio y del volumen de las exportaciones, y de la fuerte exportación de beneficios, lo que sumerge al país en una grave crisis cambiaria; y también por acción de la aceleración del proceso inflacionario, expresión de la lucha que libra la burguesía industrial y financiera con los grupos empresariales rurales, así como con las clases

asalariadas. Hay que tener presente, en efecto, que la expansión industrial brasileña, basada en la intensificación de las inversiones extranjeras, y correspondiendo a la introducción masiva de una nueva tecnología, tuvo por resultado elevar sensiblemente la productividad del trabajo y la capacidad productiva de la industria, pero agravó por eso mismo el problema del empleo de la mano de obra. Así es que entre 1950 y 1960, frente a una tasa de crecimiento demográfico de 3,1% al año, y mientras la población urbana crecía a casi un 6% anual y la producción manufacturera a más de 9%, el empleo en la actividad industrial no presentó un incremento anual mayor de 3%.¹⁸

La crisis estructural de la economía brasileña, cesados los efectos paliativos de la política de importación de divisas, estalló, pues, en una verdadera crisis industrial que arrastró al país a la depresión. En tal situación era inevitable que las contradicciones sociales que se habían manifestado en los años 1953-1954 volvieran a presentarse con mucha más fuerza, sobre todo las que impulsaban a las masas obreras y medias de las ciudades a luchar por mejorar su nivel de vida; la burguesía, presionada por ellas y con clara conciencia de la imposibilidad de mantener la expansión industrial dentro de los cuadros estrechos que le trazaban el sector latifundista-exportador y los grupos monopolistas extranjeros, intentó quebrar el círculo rompiendo el compromiso con esas fuerzas e imponiendo su política de clase. El gobierno de Janio Quadros —en 1961—, y una vez superada la indecisión parlamentaria de 1962, el de João Goulart —entre 1963 y 1964—, expresaron esa tentativa.

La política externa independiente y las reformas estructurales fueron las direcciones en que se movieron esos dos gobiernos buscando doblegar la resistencia de los sectores dominantes aliados. Con la primera se trató de crear un área de maniobra en el campo internacional que permitiera a Brasil diversificar sus mercados de

¹⁸ Datos proporcionados por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación Económica de Brasil, *Programa de Ação Econômica do Governo, 1964-1966*, Documento EPEA, No. 1, noviembre de 1964, cap. IV. En “actividad industrial” se incluye la industria manufacturera y la industria extractiva mineral.

productos básicos y sus suplementos de créditos, principalmente en el área socialista, y abrir camino para la exportación de productos industrializados hacia África y Latinoamérica, especialmente. Con las reformas se tendía en principio a la reformulación de la estructura agraria, capaz de abrir nuevos mercados al comercio ulterior y aumentar la oferta interna de materias primas y productos alimenticios. Las dos orientaciones entraban en conflicto con los intereses del sector latifundista y de los grupos monopolistas exportadores, en su mayoría norteamericanos. La adopción de medidas restrictivas tanto para el financiamiento nacional de las inversiones extranjeras como para la remesa de beneficios al exterior, y el esbozo de una política de nacionalizaciones, extendió el conflicto a todo el sector extranjero de la economía e hizo muy tensas las relaciones entre el gobierno brasileño y el norteamericano.

Para garantizar una política tal, la burguesía necesitaba que las masas populares urbanas, de considerable peso político, la respaldasen. Pero debatiéndose en una situación de crisis coyuntural que mermaba su tasa de beneficios, tenía, paradójicamente, que enfrentarse a las masas para intentar contener sus reivindicaciones salariales. La pretensión de aplicar prácticas deflacionarias, en 1961 con Janio Quadros y en 1963 con Goulart (Plan Trienal 1963-1965), encontró viva resistencia popular, y la burguesía, por razones políticas, no pudo imponerlas por la fuerza. Confiando a Goulart la tarea de contener el movimiento de masas, trató de utilizar su capacidad para explotar en beneficio propio el proceso inflacionario, a fin de sostener su margen de beneficio, lo que aceleró dicho proceso. Las luchas reivindicatorias obreras se radicalizaron con huelgas cada vez más frecuentes y amplias, y la clase media entró en pánico ante la amenaza concreta de proletarización.

La agitación que la amenaza de reforma agraria llevaba al campo, y la resistencia del sector industrial extranjero a las medidas nacionalistas, limitaron cada vez más el apoyo que el sector burgués daba a Goulart. Cuando, so pretexto de la subversión comunista, se intensificó la campaña *antigobiernista*, la clase media, desorientada por la crisis económica, se dividió y pasó a engrosar en cantidades cada vez mayores las huestes de la reacción.

Impresionada por el voceo anticomunista y por la radicalización popular, y sintiendo, al fracasar el Plan Trienal, que Goulart no ofrecía ya condiciones para contener el movimiento de masas, la burguesía abandonó el terreno. En marzo de 1964, cuando la agitación alcanzó al sector militar con la rebelión de los marineros, quedó claro que frente a la oposición radical a que se veía conducida la lucha de clases, el poder estaba vacío. En un gesto de audacia, el grupo militar de la Escuela Superior de Guerra se apoderó de él.

LA POLÍTICA DE INTERDEPENDENCIA

El gobierno de Castelo Branco se caracterizó por una actuación internacional distinta a la llamada “política externa independiente” que practicaron los gobiernos de Quadros y de Goulart, y que se basaba en los principios de autodeterminación y no intervención. Desde que, a raíz del golpe de 1964, asumió la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller del gobierno de Castelo Branco, Vasco Leitão da Cunha, rechazó la idea de una política externa independiente, invocando razones geopolíticas que vincularían estrechamente al Brasil con el mundo occidental, y particularmente con Estados Unidos, y declaró que el concepto básico de la diplomacia brasileña era el de la *interdependencia continental*. Se adoptó así una doctrina emanada de la Escuela Superior de Guerra, bajo la responsabilidad del general Golbery do Couto e Silva, diplomado por la escuela norteamericana de Fort Benning y jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), organismo creado por el régimen militar que, con sus 2.000 agentes actuando en el continente, fuera comparado a una CIA en miniatura.

Esa doctrina, llamada de “barganha (canje) leal”, fue expuesta por Couto e Silva en su libro *Aspectos geopolíticos do Brasil* (Río de Janeiro, Biblioteca del Ejército, 1957), y parte del supuesto de que, por su propia posición geográfica, Brasil no puede escapar a la influencia norteamericana. En tal situación, no le quedaría otra alternativa que “aceptar conscientemente la misión de asociarse

a la política de Estados Unidos en el Atlántico Sur”. La contrapartida de esa “elección consciente” sería el reconocimiento por Estados Unidos de que “el casi monopolio de dominio en aquella área debe ser ejercido por Brasil exclusivamente”. La expresión *casi monopolio* resulta, igualmente, de la imposibilidad de ignorar las pretensiones que en este terreno alimenta también la burguesía argentina.

Dos pronunciamientos oficiales consagraron la adopción de esa doctrina: las declaraciones del canciller Leitão da Cunha al recibir en Río de Janeiro, el 19 de mayo de 1965, a su colega de Ecuador, Gonzalo Escudero, y el discurso que pronunció días después en la ciudad de Teresina (capital del estado de Piauí) el mariscal Castelo Branco.

Saludando al canciller ecuatoriano, aludió Leitão da Cunha a

[...] un concepto inmanente a la naturaleza de la alianza interamericana, el de la interdependencia entre las decisiones de política internacional de los países del continente [...] La concepción ortodoxa y rígida de la soberanía nacional [subrayó] fue formulada en una época en que las naciones no reunían, en sus responsabilidades, una obligación de cooperar entre sí, en la búsqueda de objetivos comunes. [El canciller del gobierno militar brasileño preconizó todavía:] el refuerzo de los instrumentos multilaterales para la defensa de la institución política más americana —la democracia representativa [y aclaró:]. Pocos tienen dudas de que los mecanismos previstos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, contra agresiones o ataques abiertos, son enteramente inadecuados a las nuevas situaciones producidas por la subversión que trasciende las fronteras nacionales.

De este punto partió el mariscal Castelo Branco, en su discurso del 28 de mayo, cuando se refirió a la crisis dominicana que motivó la invasión estadounidense, apoyada por Brasil, como una agresión interna al continente. Después de proclamar la necesidad de sustituir el concepto de fronteras físicas o geográficas por el de *fronteras ideológicas*, el mariscal presidente declaró que, de

acuerdo con la actual concepción brasileña de la seguridad nacional, ésta no se limita a las fronteras físicas de Brasil, sino que se extiende a las fronteras ideológicas del mundo occidental.

Se sitúan en esa línea de pensamiento las ideas alimentadas por Castelo Branco de la intervención en Uruguay y en Bolivia, así como el decidido apoyo del gobierno brasileño a la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo. El aplauso de Brasilia a la decisión norteamericana de encaminar parte de su ayuda militar a los países latinoamericanos a través de la OEA fue también consecuencia de esa posición, y se unió a la reivindicación de que se reactivara el llamado *protocolo adicional*, que vinculaba la ayuda militar a la ayuda económica. Otra consecuencia fue la tesis de la integración militar del continente, presente en la insistencia brasileña de crear un ejército interamericano permanente, idea actualmente desechada.

Para muchos se trataba simplemente de un regreso de la política brasileña a la sumisión a Washington, que era la regla en el período anterior a Quadros, así como de la conversión definitiva de Brasil en colonia norteamericana. Nada menos cierto. Lo que se verificaba, en realidad, era la evolución, de cierta manera inevitable, de la burguesía brasileña hacia la aceptación consciente de su integración al imperialismo norteamericano, evolución que resulta de la lógica misma de la dinámica económica y política de Brasil, y que puede tener graves consecuencias para América Latina.

EL COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR

Se hace evidente su existencia cuando analizamos el programa de acción económica o Plan Trienal 1964-1966, adoptado por el gobierno del mariscal Castelo Branco y elaborado por su ministro de Planeación y ex embajador en Washington, Roberto de Oliveira Campos.¹⁹ Su objetivo era doble: reactivar el ritmo

¹⁹ Véase Ministerio de Planeamiento y Coordinación Económica de Brasil, *Programa de Ação Econômica do Govêrno, 1964-1966, op. cit.*

descendente del crecimiento del producto interno bruto, fijándolo en 6% para los años 1965-1966, y contener el aumento general de los precios, reduciéndolos del nivel de 92,4% en 1964 a 25% en 1965, y a 10% en 1966. Por otra parte, se proponía alcanzar “objetivos secundarios”, entre ellos el equilibrio de la balanza de pagos, la redistribución de la renta y, en la práctica, la democratización del capital. Además de los instrumentos clásicos de política económica (política tributaria, salarial y crediticia, manipulaciones arancelarias, contención y selección de los gastos gubernamentales), la acción estatal contenía medidas estructurales, principalmente la reforma agraria y la reorganización del mercado interno de capitales.

Desde el punto de vista de nuestro análisis, el aspecto que más interesa es la actitud del plan en relación al capital extranjero. En un estudio publicado en su órgano oficial, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) consideró que el programa de planeación económica de Campos se singularizaba, respecto a los planes económicos anteriores, “por el papel estratégico que da al capital extranjero y por las altas esperanzas en cuanto a sus ingresos”. Tras recordar que, estableciendo una formación bruta de capital de 17% al año, en 1965 el Plan asignaba al capital extranjero el 28,1% en esa formación, y el 29,4% en 1966, mientras preveía una disminución del ahorro nacional del 15,8% en los años 1954-1960, al 13% anual en 1965-1966, la CNI puntualizaba: “La disminución del ahorro nacional [...] dejará en inferioridad al capital privado nacional, cuyas inversiones serán alrededor de la mitad del influjo previsto de capital extranjero”.²⁰

Esa orientación era confirmada por otros aspectos de la acción gubernamental. Según la misma CNI, las fuentes de crédito tuvieron una actuación fuertemente reducida en 1964, aumentando el crédito privado en 84,2% y el oficial en poco más de 50%, frente a una tasa de inflación de 92,4%. Esta contención del crédito se

²⁰ Datos proporcionados por la revista de la Confederación Nacional de la Industria del Brasil, *Desenvolvimento & Conjuntura*, No. 3, Río de Janeiro, marzo de 1965.

completó con una política tributaria basada principalmente en la hoja de salarios, lo que obligó a las industrias a buscar una solución para sus costos de producción en la reducción de mano de obra, es decir, en una mayor tecnificación. Es natural que haya sido la asociación con grupos extranjeros, que tienen siempre líneas de crédito y cuentan con una tecnología disponible en virtud del ritmo de renovación tecnológica que se da en su país de origen, el camino más fácil para enfrentarse a esa coyuntura.

La política dirigida a forzar la democratización del capital de las empresas, sobre todo a través de estímulos fiscales a las reinversiones de los grupos dispuestos a concretarla, intensificó aún más esa tendencia. Ello también lo advirtió entonces la CNI, al señalar, en su estudio ya mencionado, que “si el ahorro nacional disminuye, la ‘democratización’ servirá tan sólo para permitir que los capitales extranjeros tengan acceso a por lo menos parte del control de empresas nacionales”.

Ahora bien, en el plano interno, la política económica del gobierno de Castelo Branco benefició ampliamente a las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, especialmente aquellas dedicadas a la industria pesada, al mismo tiempo que, por la retracción deliberada que provocaba en la demanda, hizo prácticamente intolerable la situación para la pequeña y mediana industria, vinculadas a la producción de bienes de consumo no durables.²¹ En otras palabras, reveló la determinación expresa del régimen de consolidar una industria de bienes intermedios,

²¹ En una evaluación de la política practicada por su predecesor, el actual gobierno del mariscal Costa e Silva anota que, después de la crisis industrial de 1965, las ramas industriales se enfrentaron a condiciones totalmente distintas de evolución, pudiendo caracterizarse dos grandes grupos de industrias: el primero, constituido por el complejo mecánico, metalúrgico, metalúrgico-eléctrico, material de transporte y químico, presentó una “elevada tasa de crecimiento, del orden del 25% sobre el año anterior, aliada a un crecimiento de la productividad del trabajo también elevado, en torno al 12%”; el segundo grupo, constituido por las industrias llamadas “tradicionales”, que comprenden la textil, de madera y mobiliario, cueros, calzado, vestidos y alimentos, ostentó un “crecimiento relativamente menor de su producto en el período, hecho esencialmente ligado a la baja elasticidad-ingreso de la demanda, además de [un] crecimiento menos acentuado en la producción por hombre empleado”. Ministerio de Planeamiento

de consumo durable y de equipos, altamente tecnificada y dotada de fuerte capacidad competitiva, capaz de convertir al país en una potencia industrial. Ello es explicable ya que una industria tal era la condición *sine qua non* para llevar a cabo la expansión exterior pretendida, y por otro lado, porque tal expansión constituía la respuesta más eficaz, desde el punto de vista de la gran industria, a la estrechez de mercados con la que chocaba la economía en el interior. Llega a crearse así una simbiosis entre los intereses de la gran industria y los sueños hegemónicos de la *elite* militar, que encontraría una expresión aún más evidente en los vínculos que establecen en el ámbito de la producción bélica. El despliegue de este nuevo sector de la economía brasileña pone al desnudo, como ningún otro, la deformación a la que está siendo conducida la misma por las características peculiares de su desarrollo capitalista, y merece un análisis un poco más minucioso.

Todo parece comenzar a fines del gobierno de Goulart, cuando éste, preocupado por romper la dependencia en que se encontraba Brasil por la estandarización de material bélico impuesta por Estados Unidos a los países latinoamericanos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, decidió diversificar las fuentes de suministro y desarrollar, simultáneamente, la industria nacional. La estandarización de dicho material, que se llevaba a cabo en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, allanaba el camino en esa dirección. En febrero de 1964, el ministro de Guerra de Goulart, el general Jair Dantas Ribeiro, firmó con Bélgica un contrato de compra de 50.000 fusiles, con derecho de reproducción por la industria brasileña.

Derrocado Goulart, el nuevo ministro de Guerra, general Artur da Costa e Silva, confirmó la operación. Casi al mismo tiempo, al tomar posesión de la presidencia de la Confederación Nacional de la Industria, el general Edmundo Macedo Soares e Silva se pronunció en favor de una política de sustitución de importaciones relativas a armamento y equipo militar, vinculando

y Coordinación Económica de Brasil, *Diretrizes de govêrno: programa estratégico de desenvolvimento*, julio de 1967, pp. 159-160.

a ello la preservación de la soberanía nacional. Diferentes actos llevados a cabo por el Gobierno evidenciaron la intención de poner en práctica esa orientación, explotando particularmente las facilidades ofrecidas por la industria bélica europea.

Es necesario recordar aquí que con la estandarización del material bélico, la industria de guerra de Estados Unidos había creado un mercado permanente para sus excedentes en América Latina, y que el Departamento de Defensa norteamericano forjó a su vez uno de los instrumentos de control más eficaces sobre las fuerzas armadas del hemisferio. La actitud brasileña no podía considerarse sino como alarmante, y explica los contactos que, en agosto de 1965, el subsecretario norteamericano de Defensa para Asuntos del Extremo Oriente, Avin Freeman, buscó con industriales brasileños. Según se supo posteriormente, Freeman manifestó el interés del Pentágono en adquirir armas y otras manufacturas de Brasil para la guerra de Vietnam, en virtud de la dificultad para movilizar, en caso de guerra no declarada, las industrias norteamericanas para la producción de guerra.²²

Por esos años, mediante autorización del presidente de la República y del Ministerio de Planeación, se constituye el llamado Grupo Permanente de Movilización Industrial (GPMI), que abarca a las empresas de la región más industrializada del país (São Paulo, Guanabara y Minas Gerais), y cuenta con la asesoría directa de miembros de las Fuerzas Armadas. En enero de 1966, de vuelta de un viaje a Estados Unidos, el presidente del GPMI, el industrial paulista Vitorio Ferraz, declaró en conferencia de prensa que la industria brasileña fabricaría armas de diversos tipos, municiones y vehículos de guerra para colaborar con los norteamericanos en la Guerra de Vietnam. Tras aclarar que para ello se contaba ya con varias fábricas de telecomunicaciones y de municiones del país, Ferraz puntualizó:

²² Véase al respecto el reportaje publicado por el periódico conservador *O Estado de São Paulo*, São Paulo, 28 de febrero de 1966.

Colaborando en el exterminio del Vietcong, [Brasil] aprovecharía la capacidad ociosa de sus fábricas y daría lugar a la creación de 180.000 nuevos empleos. Simultáneamente combatiríamos el comunismo y nuestros problemas de desocupación.²³

En los meses subsiguientes, el programa anunciado por Ferraz se puso en marcha. En marzo de 1966, Paul Hower, funcionario del Departamento de Defensa norteamericano y miembro de la Comisión Militar Mixta Brasil-Estados Unidos, llegó a Brasil con la misión expresa de tratar sobre la instalación en Brasil de una fábrica de aviones a turborreacción, del tipo antiguerrilla. En la segunda semana de agosto, el semanario de oposición *Fôlha da Semana*, de Río de Janeiro, daba detalles de la operación y proporcionaba noticias sobre el avance de los estudios para la instalación de dicha fábrica en el estado de Ceará, en el nordeste, bajo la supervisión del GPMI. La empresa reunía capitales privados nacionales y contaba con una inversión oficial de 20 millones de dólares, suministrados por la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (Sudene), organismo descentralizado, y su producción estaba destinada al abastecimiento interno y a la exportación a los demás países latinoamericanos. Desde entonces, el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, establecimiento militar de investigación y enseñanza, ha elaborado y probado diversos prototipos de aviones ligeros, cuya fabricación, en conjunto con las encomiendas del Estado, es encargada a la empresa privada.

EL SUBIMPERIALISMO Y LA REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA

En su política interna y externa, el gobierno militar de Castelo Branco manifestó no sólo una decisión de acelerar la integración de la economía brasileña a la economía norteamericana, sino

²³ Estas declaraciones se tomaron del *Correio da Manhã*, Río de Janeiro, enero de 1966. Según el periódico, las empresas en cuestión eran, por un lado, Telefunken, Delta, Motorola, Electrónica, Phillips e Invelson, y, por otro, Parque de Aeronáutica de São Paulo, Fábrica de Artilharia da Marinha, Arsenal de Marinha y Companhia Brasileira de Cartuchos.

también la intención de convertirse en el centro de irradiación de la expansión imperialista en América Latina, creando incluso las premisas de un poderío militar propio. En eso se distingue la política exterior brasileña que se ha puesto en marcha después del golpe de 1964: no se trata de aceptar pasivamente las decisiones norteamericanas (aunque la correlación real de fuerzas lleve muchas veces a ese resultado), sino de colaborar activamente con la expansión imperialista, asumiendo en ella la posición de país clave.

Esa pretensión no sólo nace de un deseo de liderazgo político de Brasil, sino que obedece principalmente a los problemas económicos que plantea la opción de la burguesía brasileña en pro del desarrollo integrado. El restablecimiento de su alianza con las antiguas clases oligárquicas vinculadas a la exportación, sellado con el golpe de 1964, dejó a la burguesía en imposibilidad de romper las limitaciones que la estructura agraria impone al mercado interno brasileño. El mismo proyecto de reforma agraria adoptado por el gobierno de Castelo Branco no admite otra manera de alterar esa estructura que con la extensión progresiva del capitalismo al campo, es decir, dentro de un largo plazo.

Por otro lado, al optar por su integración al imperialismo y al poner sus esperanzas de reactivar la expansión económica en los ingresos de capital extranjero, la burguesía brasileña concuerda en intensificar el proceso de renovación tecnológica de la industria. Atiende, así, a los intereses de la industria norteamericana, a la que le conviene instalar allende sus fronteras un parque industrial integrado que absorba los equipos que la rápida evolución tecnológica vuelve obsoletos; y, aún más, que desarrolle complementariamente ciertos niveles de la producción industrial en el marco de una nueva división internacional del trabajo.²⁴ Pero tie-

²⁴ En un informe reciente preparado por expertos de las Naciones Unidas se señala la tendencia actual al establecimiento de un nuevo esquema de división internacional del trabajo, dentro del cual los países industrializados deberán ceder las primeras fases de elaboración de materias primas a los países en vías de desarrollo, mientras aquellos se especializan en las "fases más avanzadas de elaboración y acabado de los productos, debido a su experiencia técnica y

ne que aceptar su contrapartida: en un país de gran crecimiento demográfico, que lanza anualmente al mercado de trabajo un millón de personas, la instalación de una industria relativamente moderna creará un grave problema de desempleo. Aunque con eso la burguesía soluciona, desde su punto de vista, los problemas que plantea el costo de producción industrial, puesto que, a pesar de los excedentes existentes de mano de obra, la economía brasileña, como toda economía subdesarrollada, presenta aguda escasez de mano de obra calificada.

Así, sea por su política de refuerzo de su alianza con el latifundio, sea por su política de integración al imperialismo, la burguesía brasileña no puede contar con un crecimiento del mercado interno en grado suficiente para absorber la producción creciente que resultará de la modernización tecnológica. No le queda otra alternativa que intentar expandirse hacia el exterior, y entonces se le vuelve necesario garantizar una reserva externa de mercado para su producción. El bajo costo de producción que la actual

capacidad económica". Y se añade: "Según la tecnología moderna, la transformación de materias primas generalmente requiere de procesos industriales que: I) absorben gran cantidad de capital; II) requieren considerable experiencia industrial y tecnológica; y, III) requieren mercados internacionales, pues los mercados domésticos de las naciones en desarrollo son demasiado pequeños para absorber la producción potencial. Por lo tanto, este tipo de producción necesariamente tendrá que llevarse a cabo en cooperación con las industrias establecidas de los países desarrollados (por ejemplo, inversiones directas o indirectas, asociaciones en participación), de acuerdo con arreglos apropiados que proveerán la inversión de capital, la tecnología necesaria y los mercados para los productos". Véase *Promoción de exportaciones mexicanas de productos manufacturados*. Documento preparado para el Gobierno de México por una misión de las Naciones Unidas bajo el patrocinio del Programa de Asistencia Técnica, Comisionado para la Cooperación Técnica, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, diciembre de 1966, pp. 7-13, mimeo. Por otra parte, hablando en el Congreso norteamericano sobre la integración económica de Latinoamérica, el entonces secretario de Estado adjunto para las Cuestiones Interamericanas, Jack H. Vaughn, reconoció que la industrialización resultante hará desaparecer los mercados tradicionales de ciertos productos norteamericanos, pero subrayó: "Igualmente América Latina ofrecerá un mercado más promisorio para productos de la industria norteamericana, de carácter cada vez más sofisticado". *El Día*, México, 11 de septiembre de 1965.

política salarial y la modernización industrial tienden a crear señalada la misma dirección: la exportación de productos manufacturados.

No se trata de una tendencia totalmente nueva. La política exterior de Quadros y de Goulart buscaba también garantizar una reserva externa de mercado para una expansión comercial brasileña en África y Latinoamérica. La diferencia está en que entonces Brasil adoptaba una posición de *freelancer*, en el mercado mundial, confiando en que con las reformas estructurales internas no tardarían en desaparecer las limitaciones que frenaban el crecimiento del mercado interno brasileño. La exportación aparecía, pues, como una solución provisional tendiente a proporcionar a la política reformista burguesa el plazo necesario para que fructificara. A partir de Castelo Branco, por el contrario, la burguesía trata de compensar su imposibilidad para ampliar el mercado interno mediante la incorporación extensiva de mercados ya formados, como el uruguayo, por ejemplo. La expansión comercial deja de ser así una solución provisional y complementaria a la política reformista y se convierte en la alternativa misma de las reformas estructurales.

Lo que así se planteó fue la expansión imperialista de Brasil en Latinoamérica, que corresponde en verdad a un subimperialismo o a una extensión indirecta del imperialismo norteamericano (no olvidemos que el centro de un imperialismo tal sería una economía brasileña integrada a la norteamericana). Ese intento de integrar a Latinoamérica económica y militarmente bajo el comando del imperialismo norteamericano y con el apoyo de Brasil posteriormente ha sufrido muchas vicisitudes, y sigue siendo hoy una intención. Sin embargo, ha aclarado factores valiosos para estimar las perspectivas del proceso revolucionario brasileño y, en último término, latinoamericano.

Un primer aspecto que debe considerarse es que la integración imperialista de Latinoamérica, en su nueva fase, iniciada con el golpe militar en Brasil, no podrá ejercerse sino en el marco de la cooperación antagonica. El antagonismo sobre todo será acentuado allí donde se enfrentan burguesías nacionales poderosas,

como es el caso de Argentina y Brasil,²⁵ pero la cooperación o la colaboración será, con más frecuencia, la regla que regirá las relaciones de esas burguesías entre sí y con Estados Unidos. El peso que tendrá en la balanza la influencia norteamericana y brasileña obliga a esa colaboración. Pero principalmente esa colaboración la necesitarán las clases dominantes del hemisferio para contener la ascensión revolucionaria de las masas que se verifica actualmente y que sólo puede agravarse con la marcha de la integración imperialista.

En este punto en particular el caso brasileño es paradigmático. El golpe militar de 1964 —que significó el rompimiento por parte de la burguesía de la política de compromiso que practicó desde su llegada al poder, es decir, desde la revolución de 1930— abre una etapa nueva en el proceso de la lucha de clases. Aunque muchos sectores sociales, principalmente de clase media, busquen restablecer entre la burguesía y las masas el diálogo político que existía antes de 1964, las relaciones de clase se caracterizan actualmente por una escisión horizontal que deja a un lado a la coalición dominante —esencialmente la burguesía, los empresarios extranjeros y los grandes propietarios de tierra— y a otro a las masas trabajadoras de la ciudad y del campo. La pequeña burguesía sufre contradictoriamente el efecto de esa escisión y asume posiciones que van del radicalismo de extrema izquierda al neofascismo de extrema derecha, sin olvidar los esfuerzos conciliadores de una capa céntrica que obedece a la consigna de “redemocratización” lanzada por la directiva del PC brasileño.

Es inevitable que a plazo más o menos corto esa escisión horizontal de las relaciones de clase provoque en Brasil una guerra civil abierta. La expansión imperialista de la burguesía brasileña

²⁵ La rivalidad brasileño-argentina se ha exacerbado después de la ascensión al poder del general Juan Carlos Onganía. Entre los muchos puntos de discordia que existen actualmente entre los dos países se encuentra el aprovechamiento de las aguas del río Paraná y las disputas sobre la influencia ejercida en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ambos países han desencadenado además una carrera armamentista, que trae consigo compras masivas de armas en el exterior y el desarrollo acelerado de sus respectivas industrias bélicas.

tiene que basarse en una mayor explotación de las masas trabajadoras nacionales, sea porque necesita de una producción competitiva para el mercado externo, lo que implica salarios bajos y mano de obra disponible, es decir, un elevado índice de desempleo, sea porque se procesa juntamente con un aumento de la penetración de los capitales norteamericanos, lo que exige la extracción de un sobrelucro de la clase obrera. Esa intensificación de la explotación capitalista del pueblo brasileño es factor suficiente para intensificar la lucha de clases, algo que pone en riesgo la posición de la burguesía.

El momento preciso en que eso ocurra no sólo depende, desde luego, de la intensificación de la explotación capitalista, sino también del tiempo que llevará a las masas brasileñas extraer su lección de los acontecimientos de 1964 y, principalmente, de la capacidad de la izquierda para orientarlas en ese proceso de maduración. Hay que contar, sin embargo, con el acelerado ritmo que lleva, en nuestros días, el proceso revolucionario en Latinoamérica y con las repercusiones que producirá sobre él la integración imperialista, lo que puede acelerar considerablemente la reorganización en nuevas bases de las izquierdas en Brasil.

La conjunción de los movimientos revolucionarios de Brasil y de los demás países latinoamericanos, es decir, la internacionalización de la revolución latinoamericana, aparece como la contrapartida inevitable del proceso de integración imperialista en su nueva fase inaugurada por el golpe militar brasileño. El hecho de que la marcha de esa integración tienda a escindir cada vez más las relaciones entre las burguesías nacionales y las masas trabajadoras deja entrever que el carácter de esa revolución, más que popular, será socialista. El análisis del caso brasileño proporciona en este sentido indicaciones sumamente útiles.

3. EL CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN BRASILEÑA

Las luchas políticas brasileñas de los últimos 15 años son la expresión de una crisis más amplia, de carácter social y económico, que parecía no dejar al país otra salida que la de una revolución.

Sin embargo, una vez implantada la dictadura militar, en abril de 1964, las fuerzas de izquierda se han visto obligadas a revisar sus concepciones sobre el carácter de la crisis brasileña como punto de partida para definir una estrategia de lucha contra la situación que al final ha prevalecido. En un diálogo a veces lleno de amargura, los intelectuales y líderes políticos vinculados al movimiento popular plantean hoy dos cuestiones fundamentales: ¿qué es la revolución brasileña? ¿Qué representa en su contexto la dictadura militar?

Las respuestas se orientan, por lo general, a lo largo de dos hilos conductores. La revolución brasileña es entendida, primero, como el proceso de modernización de las estructuras económicas del país, principalmente a través de la industrialización, proceso que se acompaña de una tendencia creciente de participación de las masas en la vida política.²⁶ Identificada así con el propio desarrollo económico, la revolución brasileña tendría su fecha inicial en el movimiento de 1930, y se ha extendido sin interrupción hasta el golpe de abril de 1964. Paralelamente, y en la medida en que los factores primarios del subdesarrollo brasileño son la vinculación al imperialismo y a la estructura agraria, que muchos consideran semifeudal, el contenido de la revolución brasileña sería antiimperialista y antifeudal.

Esas dos direcciones conducen, pues, a un solo resultado —la caracterización de la revolución brasileña como una revolución democrático-burguesa— y descansan en dos premisas básicas: la primera consiste en ubicar el antagonismo nación-imperialismo como la contradicción principal del proceso brasileño; la segunda, en admitir un dualismo estructural en esa misma sociedad, que opondría el sector precapitalista al sector propiamente capitalista. Su implicación más importante es la idea de un frente único formado por las clases interesadas en el desarrollo, básicamente la burguesía y el proletariado, contra el imperialismo y el latifundio. Su aspecto más curioso es el de unir una noción antidialéctica,

²⁶ Véase, como expresión más acabada de esta tendencia, la obra de Celso Furtado, *A pré-revolução brasileira*, Río de Janeiro, s.e., 1962.

como la del dualismo, con una noción paradialéctica, cual sería la de una revolución burguesa permanente, de la que los acontecimientos políticos brasileños de los últimos 40 años no habrían sido más que episodios.

En esa perspectiva, el régimen militar implantado en 1964 aparece simultáneamente como una consecuencia y una interrupción. Así es que, interpretada como un gobierno impuesto desde fuera por el imperialismo norteamericano, la dictadura militar es considerada también como una interrupción y aun como un retroceso en el proceso de desarrollo, lo que se expresaría en la depresión a la que fue llevada la economía brasileña.²⁷ El espinoso problema planteado por la adhesión de la burguesía a la dictadura es solucionado cuando se admite que, temerosa por la radicalización ocurrida en el movimiento de masas en los últimos días del gobierno de Goulart, esa clase, del mismo modo que la pequeña burguesía, apoyó el golpe de Estado articulado por el imperialismo y la reacción interna, pasando luego a ser víctima de su propia política en virtud de la orientación antidesarrollista y desnacionalizante adoptada por el gobierno militar.

A partir de tal interpretación, la izquierda brasileña (nos referimos a su sector reformista, representado por el movimiento nacionalista y el Partido Comunista brasileño) toma como consigna la “redemocratización”, destinada a restablecer las condiciones necesarias para la participación política de las masas y acelerar el proceso de desarrollo. En último término, se trata de crear de nuevo la base necesaria para el restablecimiento del frente único obrero-burgués, que marcó el gobierno de Goulart, es decir, el diálogo político y la comunidad de propósitos entre las dos clases. Y es así como esa izquierda, basada en su concepción de la revo-

²⁷ Según la Fundación Getúlio Vargas, entidad semioficial, el producto nacional bruto de Brasil presentó las siguientes variaciones: 1956-1961, 7%; 1962, 5,4%; 1963, 1,6%; y 1964, 3%. En 1965 el PNB presentó sensible recuperación, aumentando en un 5%, pero la producción industrial propiamente dicha disminuyó casi en la misma proporción. Sólo a partir de 1967 la economía brasileña entró en una fase de recuperación.

lución brasileña, no llega hoy a otro resultado que el de señalar, como salida para la crisis actual, una vuelta al pasado.

EL COMPROMISO POLÍTICO DE 1937

Sería difícil verificar la exactitud de esa concepción sin examinar de cerca el capitalismo brasileño, la manera como se ha desarrollado y su naturaleza actual. Por lo general, los estudiosos están de acuerdo en aceptar la fecha de 1930 como el momento decisivo que marcó el tránsito de una economía semicolonial, basada en la exportación de un solo producto y caracterizada por su actividad eminentemente agrícola, a una economía diversificada, animada por un fuerte proceso de industrialización. En efecto, si el inicio de la industrialización data de más de 100 años y estuvo incluso en la raíz del proceso político revolucionario que, victorioso en 1930, permitió su aceleración, y si la actividad fabril ganó impulso en la década de 1920, no es posible negar que es a partir de la revolución de 1930 que la industrialización se afirma en el país y emprende el cambio global de la vieja sociedad.

La crisis mundial de 1929 obró mucho en este sentido. Imposibilitado para colocar en el mercado internacional su producción y sufriendo el efecto de una demanda de bienes manufacturados que ya no podía satisfacer con importaciones, el país acelera la sustitución de importaciones de bienes manufacturados desarrollando un proceso que parte de la industria liviana y llega, hacia los años cuarenta, a la industria de base. Es primariamente la crisis de la economía cafetera y la presión de la nueva clase industrial para participar del poder lo que produce el movimiento revolucionario de 1930, el que obliga a la vieja oligarquía terrateniente a romper su monopolio político e instala en el poder al equipo revolucionario encabezado por Getúlio Vargas.

Durante algunos años, las fuerzas políticas se mantendrán en un equilibrio inestable, mientras intentan nuevas composiciones. La embestida fracasada de la oligarquía, en 1932, refuerza la posición de la pequeña burguesía, cuya ala radical, unida al proletariado, desea profundizar el cambio revolucionario reclamando sobre

todo una reforma agraria. La insurrección izquierdista de 1935 concluye, empero, con la derrota de esa tendencia, lo que permite a la burguesía consolidar su posición. Aliándose a la oligarquía y al sector derechista de la pequeña burguesía (que será aplastado el año siguiente), en 1937 la burguesía apoya la implantación de un régimen dictatorial liderado por Vargas.

El *Estado Novo* de 1937, un régimen de naturaleza bonapartista, estuvo lejos de representar una opresión abierta de clase. Por el contrario, con una legislación social avanzada, complementada con una organización sindical de tipo corporativo y un fuerte aparato policial y de propaganda, trató de encuadrar a las masas obreras. Paralelamente, instituyendo el concurso obligatorio para los cargos públicos de bajo y medio nivel, concedió a la pequeña burguesía (única clase verdaderamente letrada) el monopolio de los mismos y le dio, por tanto, una perspectiva de estabilidad económica.

La cuestión fundamental está en comprender por qué la revolución de 1930 condujo a ese equilibrio político, y más exactamente por qué tal equilibrio se basó en un compromiso entre la burguesía y la antigua oligarquía terrateniente y mercantil. La izquierda brasileña, haciéndose eco de un Virgínio Santa Rosa (intérprete de la pequeña burguesía radical de los años treinta), tiende hoy a atribuir ese hecho a la ausencia de conciencia de clase de la burguesía, explicable por la circunstancia de haberse realizado la industrialización a costa de capitales originados por la agricultura que ya en ese momento no encontraban un campo de inversión. Incide, a nuestro entender, en un doble error.

Primero, el desplazamiento de capitales de la agricultura hacia la industria tiene muy poco que ver, en sí mismo, con la conciencia de clase. No son los capitales los que tienen tal conciencia, sino los hombres que los manejan. Y nada indica —por el contrario, estudios recientes dicen lo inverso— que los latifundistas se hayan convertido en empresarios industriales. Lo que parece haber pasado ha sido un drenaje de los capitales de la agricultura hacia la industria mediante el sistema bancario; esto de paso

explica ampliamente el comportamiento político indefinido y aun doble de la banca brasileña.

El segundo error consiste en creer que la burguesía industrial no ha luchado por imponer su política siempre que sus intereses no coincidían con los de la oligarquía latifundista-mercantil. Toda la historia político-administrativa del país de los últimos 40 años ha sido, justamente, el recuento de esa lucha en el terreno del crédito, de los tributos, de la política cambiaria. Si el conflicto no fue ostensible, si no estalló en insurrecciones y guerras civiles, fue precisamente porque se desarrolló en el marco de un compromiso político, el de 1937. Los momentos en que ese compromiso ha sido puesto en jaque fueron aquellos en que la vida política del país se convulsionó: 1954, 1961, 1964.

Ahora bien, el compromiso de 1937 expresa de hecho una complementación entre los intereses económicos de la burguesía y los de las antiguas clases dominantes; es en este marco que el drenaje de capitales tiene sentido, aunque no se debe confundir tal drenaje con la complementación misma. Y es por haber reconocido la existencia de ésta y actuado en consecuencia que no se puede hablar de falta de conciencia de clase por parte de la burguesía brasileña.

Uno de los elementos significativos de esa complementariedad es, en efecto, el drenaje de capitales hacia la industria, por el cual la burguesía tuvo acceso a un excedente económico que no necesitaba expropiar, puesto que se le ponía espontáneamente a disposición. No es, sin embargo, el único: mantener el precio externo del café mientras se devaluaba internamente la moneda, interesaba a los dos sectores —a la oligarquía porque preservaba el nivel de sus ingresos y a la burguesía porque funcionaba como una tarifa proteccionista—. La demanda industrial interna era, por otra parte, sostenida exactamente por la oligarquía, necesitada de los bienes de consumo que ya no podía importar, y en condición de adquirirlos solamente en la medida en que se le garantizaba su nivel de ingresos.

Éste es, sin duda, el punto esencial para comprender la complementariedad objetiva en que se basaba el compromiso de

1937. Se trata de ver que, sosteniendo la capacidad productiva del sistema agrario (mediante la compra y el almacenamiento o la quema de los productos no exportables), el Estado garantizaba a la burguesía un mercado inmediato, el único del que en realidad podía disponer en la crisis coyuntural mundial. Por sus características rezagadas, el sistema agrario mantenía, por otra parte, su capacidad productiva en un nivel inferior a las necesidades de empleo de las masas rurales, con lo cual forzaba un desplazamiento constante de la mano de obra hacia las ciudades. Esta mano de obra migratoria no sólo iba a engrosar la clase obrera empleada en las actividades manufactureras, sino que crearía un excedente permanente de trabajo, es decir, un ejército industrial de reserva que permitiría a la burguesía rebajar los salarios e impulsar la acumulación de capital exigida por la industrialización. En consecuencia, una reforma agraria no habría hecho más que trastornar ese mecanismo, e incluso podría haber provocado el colapso de todo el sistema agrario, lo que hubiera liquidado el mercado para la producción industrial y engendrado el desempleo masivo en el campo y en la ciudad, desencadenando, pues, una crisis global en la economía brasileña.

Es por esto que no cabe hablar de una dualidad estructural de esa economía, tal como se la suele entender, es decir, como una oposición entre dos sistemas económicos independientes y aun hostiles, sin que la cuestión quede seriamente confundida.²⁸ Por el contrario, el punto fundamental está en reconocer que la agricultura de exportación fue la base misma sobre la cual se desarrolló el capitalismo industrial brasileño. Más que esto, y desde un punto de vista global, la industrialización fue la salida que encontró el capitalismo brasileño en el momento en que la crisis mundial, iniciada con la guerra de 1914, agravada por el *crack* de 1929 y llevada a su paroxismo con la guerra de 1939, trastornaba el mecanismo de los mercados internacionales.

²⁸ La refutación más radical de la tesis del dualismo estructural la hizo André Gunder Frank en su *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Nueva York, Monthly Review Press, 1967.

Este razonamiento conduce también a desechar la tesis de una revolución permanente de la burguesía, puesto que se tiene que enmarcar su revolución en el período 1930-1937. El *Estado Novo* no sólo significa la consolidación de la burguesía en el poder: también representa la renuncia de esa clase a cualquier iniciativa revolucionaria, su alianza con las viejas clases dominantes en contra de las alas radicales de la pequeña burguesía, así como de las masas proletarias y campesinas, y el encauzamiento del desarrollo capitalista nacional por la vía trazada por los intereses de la coalición dominante que él expresa.

LA RUPTURA DE LA COMPLEMENTARIEDAD

Alimentada con el excedente económico creado por la explotación de los campesinos y obreros, y teniendo a la estructura agraria como elemento regulador de la producción industrial y del mercado de trabajo, la industria nacional que se desarrolla entre los años 1930 y 1950 depende del mantenimiento de esa estructura, aunque se enfrente constantemente al latifundio y al capital comercial en lo que atañe a la apropiación de las ganancias creadas por el sistema. Sin embargo, y en la medida en que se realiza el desarrollo económico, el polo industrial de esa relación tiende a autonomizarse y entra en conflicto con el polo agrario. Es posible identificar tres factores a raíz de ese antagonismo.

El primero se refiere a la crisis general de la economía de exportación, resultado de las nuevas tendencias que rigen el mercado mundial de materias primas. Aplazada por la guerra de 1939 y por el conflicto coreano, esa crisis se volverá ostensible a partir de 1953. La incapacidad del principal mercado comprador de los productos brasileños —el norteamericano— para absorber las exportaciones tradicionales del país, la competencia de los países africanos y de los propios países industrializados, y a su vez la formación de zonas preferenciales, como el Mercado Común Europeo, la hacen irreversible.

Esta situación ya determinaba que la complementariedad hasta entonces existente entre la industria y la agricultura fuera

puesta en duda. Amén de la acumulación de existencias invendibles, que debiendo ser financiadas por el Gobierno representaban una inmovilización de recursos retirados a la actividad industrial, la agricultura ya no ofrecía a la industria el monto de divisas que ésta necesitaba en escala creciente para importar equipos y bienes intermedios, fuera para mantener en actividad el parque manufacturero existente, fuera, principalmente, para propiciar la implantación de una industria pesada. Así es que, a pesar de que las exportaciones mundiales entre 1951 y 1960 aumentaron en un 55%, creciendo a la tasa media geométrica del 5,03%, en el mismo período las exportaciones brasileñas disminuyeron en un 38%, bajando a la tasa media geométrica anual de 3,7%.²⁹ Mientras tanto, las importaciones de materias primas, combustibles, bienes intermedios, equipos y trigo, representan el 70% del total de las importaciones, lo que vuelve extremadamente rígida esa cuenta de la balanza comercial, ya que cerca del 70% del total de la importación está constituido por productos imprescindibles para mantener la producción interna corriente y satisfacer las necesidades básicas de la población.³⁰

Un segundo factor que estimula el antagonismo entre la industria y la agricultura resulta de la incapacidad de ésta para abastecer los mercados urbanos del país, en franca expansión. Las carencias surgidas en el suministro de materias primas y productos alimenticios a las ciudades provocan el alza de precios de unas y de otros, consecuencia del carácter rezagado de la agricultura, que resulta a su vez de la concentración de la propiedad de la tierra —este hecho es puesto en evidencia por su repercusión en el nivel de vida de la clase obrera—. La presión sindical en favor de

²⁹ Datos proporcionados por la revista de la Confederación Nacional de la Industria del Brasil, *Desenvolvimento & Conjuntura*, Río de Janeiro, marzo de 1965.

³⁰ Ministerio de Planeamiento y Coordinación Económica de Brasil, *Programa de Ação Econômica do Governo, 1964-1966, op. cit.*, pp. 120-121. A continuación, el documento señala explícitamente: “Si el país no logra invertir en un futuro próximo la tendencia desfavorable de la capacidad para importar de los últimos años, tal vez sea necesario racionar las importaciones más allá del mencionado margen de 30%, con lo que se comprometería no solamente la tasa de desarrollo económico, sino también la de la producción corriente”.

mejores salarios colmará esa tendencia, gravando pesadamente el costo de producción industrial y conduciendo, a la larga, a la depresión económica.

Un último factor que puede ser aislado, con fines analíticos, es la modernización tecnológica que acompañó al proceso de industrialización, principalmente después de la guerra de 1939. La reducción de la participación del trabajo humano en la actividad manufacturera, en términos relativos, hizo que se produjera un gran margen entre los excedentes de mano de obra liberados por la agricultura y las posibilidades de empleo creadas por la industria. El problema no habría sido tan grave si la mano de obra excedente hubiera estado en condiciones de competir con la mano de obra empleada, pues la existencia de un mayor ejército industrial de reserva habría neutralizado la presión sindical por aumento de salarios, contrarrestando el efecto del alza de los precios agrícolas internos. Esto no se dio, ya que esa mano de obra sólo se puede emplear en ciertas actividades que exigen poca calificación del trabajo —la construcción civil, por ejemplo—, lo que aumenta su incapacidad profesional al mismo ritmo que avanza la modernización tecnológica. En consecuencia, los sectores clave de la economía, como la metalurgia, la industria mecánica y la industria química, no pudieron beneficiarse de un aumento real de la oferta de trabajo en proporción a la migración interna de mano de obra.

En esas condiciones, las migraciones rurales representaron cada vez más un empeoramiento de los problemas sociales urbanos. Esos problemas se unieron a los que surgían en el campo, donde cundía la lucha por la posesión de la tierra y se producían movimientos como el de las Ligas Campesinas. Sin llegar jamás a determinar el sentido de la evolución de la sociedad brasileña, el movimiento campesino, con sus conflictos sangrientos y sus consignas radicales, acabó por convertirse en el telón de fondo donde se proyectó la radicalización de la lucha de clases en las ciudades.

La ruptura de la complementariedad entre la industria y la agricultura, que terminó por plantear la necesidad de una reforma

agraria, determinó, por parte de la burguesía, el deseo de revisión del compromiso de 1937, revisión intentada con el segundo gobierno de Vargas (1951-1954) y con los gobiernos de Quadros (1961) y Goulart (1963-1964). En realidad, lo que pasaba era que el desarrollo del capitalismo industrial brasileño chocaba con el límite que le imponía la estructura agraria. Al estrellarse contra el otro límite, representado por sus relaciones con el imperialismo, todo el sistema entraría en crisis, la cual no sólo revelaría su verdadera naturaleza, sino que lo impulsaría hacia una nueva etapa de su desenvolvimiento.

LA EMBESTIDA IMPERIALISTA

En el período clave de su desarrollo, es decir, entre 1930 y 1950, la industria brasileña se benefició de la crisis mundial del capitalismo. Esto se debió no sólo a la imposibilidad en que se encontraba la economía nacional de satisfacer con importaciones la demanda interna de bienes manufacturados, sino también porque la crisis le permitió adquirir a bajo precio los equipos necesarios para su implantación y, principalmente, porque ella alivió considerablemente la presión de los capitales extranjeros sobre el campo de inversión representado por Brasil. Esta situación es común para el conjunto de los países latinoamericanos. Las inversiones directas norteamericanas en América Latina, que habían sido del orden de los 3.462 millones de dólares en 1929, bajaron a 2.705 millones en 1940; todavía en 1946 el monto de esas inversiones era inferior al de 1929, mas en 1950 alcanzaba ya un nivel superior, sumando 4.445 millones, para en 1952 llegar a los 5.443 millones de dólares, y doblar esa suma a principios de la década de 1960.

Este cambio de tendencias no se limita al monto de las inversiones, sino que afecta también su estructura. Así, mientras en 1929 solamente 231 millones (menos del 10% del total) eran invertidos en la industria manufacturera, en 1950 este sector atraía el 17,5% (780 millones) y en 1952 el 21,4% (1.166 millones de dólares). Si tomamos la relación entre la incidencia de las inversiones en el sector agrícola y en la minería, petróleo y manufactu-

ra, veremos que la distribución proporcional de 10% y de 45%, respectivamente, que existía en 1929, en 1952 pasa a ser de 10% y de 60% del total.

En la historia de las relaciones de América Latina con el imperialismo norteamericano, los primeros años de la década de 1950 constituyen, pues, un *tournant*. Así también para Brasil. Es cuando la crisis del sistema tradicional de exportación salta a la vista, como señalamos anteriormente. Pero, sobre todo, cuando se intensifica la penetración directa del capital imperialista en el sector manufacturero nacional, de tal manera que las inversiones norteamericanas, que habían sido en ese momento de 46 millones de dólares en 1929, de 70 millones en 1940 y de 126 millones en 1946, llegan en 1950 a 284 millones, y en 1952 a 513 millones de dólares, mientras el monto global de esas inversiones en todos los sectores pasa de 194 millones en 1929 a 240 en 1940, a 323 millones en 1946, 644 en 1950 y 1.013 millones de dólares en 1952.

Esa embestida de los capitales privados de Estados Unidos es acompañada de un cambio en las relaciones entre el Gobierno de ese país y el de Brasil. Durante el período de guerra, el Gobierno brasileño logra obtener la ayuda financiera pública norteamericana para proyectos industriales de importancia, como la planta siderúrgica de Volta Redonda, que ha permitido la afirmación efectiva de una industria básica en el país. En la posguerra, una misión norteamericana visita Brasil para realizar un estudio de sus posibilidades económicas e industriales —el respectivo informe se publica en 1949—, mientras el Gobierno brasileño elabora el Plan Salte (salud, alimentación, transportes y energía), para el período 1949-1954. En 1950 se crea la Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos, y es aprobado por los dos gobiernos un proyecto de financiamiento público norteamericano del orden de 500 millones de dólares para los proyectos destinados a superar los puntos de estrangulamiento en los sectores infraestructurales y de base.

La ejecución de ese proyecto de financiamiento es obstaculizada, empero, por el Gobierno norteamericano, que en 1952 —cuando el republicano Eisenhower sucede en la Presidencia

al demócrata Truman— acaba por negarse a reconocer la obligatoriedad del convenio de ayuda. La táctica era clara: se trataba de imposibilitarle a la burguesía brasileña el acceso a recursos que le permitiesen superar con relativa autonomía los puntos de estrangulamiento surgidos en el proceso de industrialización, y forzarla a aceptar la participación directa de los capitales privados norteamericanos, los cuales realizaban, como señalamos, una embestida sobre Brasil. Esa táctica sería adoptada, en adelante, de manera sistemática por Estados Unidos; en la raíz estaba el conflicto que hacia 1958 estalla entre el gobierno de Kubitschek y el Fondo Monetario Internacional, y la ulterior oposición de los gobiernos de Quadros y de Goulart a la administración norteamericana.

IMPERIALISMO Y BURGUESÍA NACIONAL

La burguesía brasileña intentará reaccionar contra la presión de Estados Unidos en tres ocasiones. La primera, en 1953-1954, con el brusco cambio de orientación que se opera en el gobierno de Vargas (quien, depuesto en 1945, regresará al poder como candidato victorioso de la oposición en 1951). Buscando reforzarse en la política externa por medio de una aproximación a la Argentina de Perón, Vargas altera su política interna lanzando un programa desarrollista y nacionalista que se expresa en la resurrección del Plan Salte (que había quedado sin aplicación y vuelve a la escena con el nombre de Plan Lafer), en la ley del monopolio estatal del petróleo y la proposición al Congreso de un proyecto que instituya un régimen idéntico para la energía eléctrica, en la creación del Fondo Nacional de Electrificación y en la elaboración de un programa federal de construcción de carreteras. Una primera reglamentación de la exportación de utilidades del capital extranjero es dictada al mismo tiempo que se anuncia una nueva reglamentación más rigurosa, y que el Gobierno envía al Congreso una ley que tasa los beneficios extraordinarios. Paralelamente, en pláticas palaciegas se ventila la intención gubernamental de atacar el problema del latifundio con una reforma agraria basa-

da en expropiaciones y en el reparto de tierras. Para sostener su política, Vargas decide movilizar al proletariado urbano: el ministro de Trabajo, João Goulart, concede un aumento del 100% sobre los niveles del salario mínimo y llama a las organizaciones obreras a respaldar al Gobierno.

La tentativa fracasa. Presionado por la derecha, hostilizado por el Partido Comunista y acosado por el imperialismo (principalmente gracias a maniobras que disminuían el precio del café y desencadenaban una crisis cambiaria), el ex dictador acepta la dimisión de Goulart y, mediante varias concesiones, busca un arreglo con la derecha. Pero la lucha iba ya muy adelantada, y el abandono de la política de movilización obrera, expresada por la sustitución de Goulart, sirve tan sólo para entregarlo indefenso a sus enemigos.

El 24 de agosto de 1954, virtualmente depuesto, Vargas se suicida. La Instrucción 113, expedida por el gobierno interino de Café Filho y mantenida por Juscelino Kubitschek (quien asume la Presidencia de la República en 1956), consagra la victoria del imperialismo. Creando facilidades excepcionales para el ingreso de los capitales extranjeros, ese instrumento jurídico corresponde a un compromiso entre la burguesía brasileña y los grupos económicos norteamericanos. El flujo de inversiones privadas procedentes de Estados Unidos alcanzó en menos de cinco años cerca de 2.500 millones de dólares, e impulsó el proceso de industrialización y aflojó la presión que el deterioro de las exportaciones tradicionales ejercía sobre la capacidad para importar. Observemos que esa penetración de capital imperialista presentó tres características principales: se dirigió, casi en su totalidad, a la industria manufacturera y de base; se procesó bajo la forma de introducción en el país de máquinas y equipos ya obsoletos en Estados Unidos, y se realizó en gran parte a través de la asociación de compañías norteamericanas a empresas brasileñas.

Hacia 1960, el deterioro constante de las relaciones de intercambio comercial y la tendencia de las inversiones extranjeras a declinar, agravados por los movimientos reivindicativos de la clase obrera (en virtud, principalmente, de la ya señalada alza de

los precios agrícolas internos) agudizan nuevamente las tensiones entre la burguesía brasileña y los monopolios norteamericanos. Jânio Quadros, quien sucede a Kubitschek en 1961, intentará evitar la crisis que se acerca. Expresando los intereses de la gran burguesía de São Paulo, Quadros practica una política económica de contención de los niveles salariales y de liberalismo, cuyo objetivo es crear de nuevo atractivos a las inversiones de capital, incluso las extranjeras, al mismo tiempo que plantea la necesidad de reformas de base, sobre todo en el campo. A ello agrega una orientación independiente en la política exterior, que se destina a ampliar el mercado brasileño para exportaciones tradicionales, diversificar sus fuentes de abastecimiento en materias primas, equipos y créditos, y posibilitar la exportación de productos manufacturados para África y Latinoamérica. Basado en el poder de discusión que le daba esa diplomacia, y en una alianza con la Argentina de Frondizi (alianza concretada en el acuerdo de Uruguayana, firmado en abril de 1961), Quadros buscará, también sin éxito, imponer condiciones en la Conferencia de agosto de Punta del Este, en que se consagra el programa de la Alianza para el Progreso y que representa una revisión de la política interamericana.

Como Vargas, Quadros fracasa. La reacción de la derecha, la presión imperialista y la insubordinación militar lo llevan al gesto dramático de la renuncia. Goulart, que le sucede, después de que se frustra una maniobra para someter el país a la tutela militar —algo que anuncia lo que pasaría en 1964—, dedicará todo el año de 1962 a restablecer la integridad de sus poderes, que la implantación del parlamentarismo, en 1961, limitara. Para ello revive en la política nacional el frente único obrero burgués, de inspiración varguista, respaldado ahora por el Partido Comunista.

Aunque los intentos para restablecer la alianza con Argentina no producen resultados, ni los de sustituir esa alianza por la aproximación a México y Chile, con Goulart la política externa brasileña no sufre cambios sensibles. Internamente se agudiza la oposición entre la burguesía, sobre todo sus estratos inferiores, y el imperialismo, lo que conduce a la concreción del monopolio

estatal de la energía eléctrica, que Vargas planteara en 1953, y a la reglamentación de la exportación de utilidades de las empresas extranjeras. Sin embargo, en 1963, tras el plebiscito popular que restaura el presidencialismo, el Gobierno tendrá que enfrentarse a una disyuntiva insuperable: obtener el respaldo obrero para la política externa y las reformas de base, de interés para la burguesía, y contener, al mismo tiempo, por exigencia de la burguesía, las reivindicaciones salariales. La imposibilidad de solucionar esa disyuntiva conduce al Gobierno al inmovilismo, que acelera la crisis económica, agudiza la lucha de clases y finalmente abre las puertas a la intervención militar.

Este examen superficial de las luchas políticas brasileñas de los últimos 15 años parece dar razón a la concepción generalmente adoptada por la corriente mayoritaria de izquierda que concibe una burguesía desarrollista, antiimperialista y antifeudal. La primera cuestión está, sin embargo, en saber lo que se entiende por burguesía nacional. Las vacilaciones de la política burguesa, y sobre todo la conciliación con el imperialismo que puso en práctica en el período de Kubitschek, provocaron juicios que hablaban de sectores de la burguesía comprometidos con el imperialismo, en oposición a la burguesía propiamente nacional. Para muchos, esta última se identificaría con la burguesía mediana y pequeña, mientras los sectores comprometidos reciben la calificación de burguesía monopolista o gran burguesía.

La distinción tiene su razón de ser. Se puede, en efecto, considerar que las nacionalizaciones, las reformas de base y la política externa independiente han representado para la gran burguesía, es decir, para sus sectores económicamente más fuertes, un instrumento de chantaje destinado a aumentar su poder de discusión frente al imperialismo, más que una estrategia para lograr un desarrollo propiamente autónomo del capitalismo nacional. Inversamente, para la mediana y la pequeña burguesía (que sectorialmente predominan en la industria textil y en la industria de refacciones automovilísticas, por ejemplo, y regionalmente en Río Grande do Sul), se trataba efectivamente de limitar, y aun excluir, la participación del imperialismo en la economía brasileña. A esos

estratos burgueses más débiles habría que agregar ciertos grupos industriales de gran dimensión, pero todavía en fase de implantación, favorables por tanto a una política proteccionista, como es el caso de la joven siderurgia de Minas Gerais, en la que sin embargo inciden con fuerza capitales alemanes y japoneses.

La razón para esa diferencia de actitud entre la gran burguesía y sus estratos inferiores es evidente. Frente a la penetración de los capitales norteamericanos, la primera tenía una opción —la de asociarse a esos capitales— que más que una opción era una conveniencia. Es normal que el capital extranjero, ingresando al país principalmente bajo la forma de equipos y técnicas, buscase asociarse a grandes unidades de producción, capaces de absorber una tecnología que, por el hecho de ser obsoleta en Estados Unidos, no dejaba de ser avanzada para Brasil. Aceptando esa asociación, y beneficiándose de las fuentes de crédito y de la nueva tecnología, las grandes empresas nacionales aumentaron su plusvalía relativa y su capacidad competitiva en el mercado interno. En estas condiciones, la penetración de capitales norteamericanos significaba la absorción y la quiebra de las unidades más débiles, algo que se expresó en una acelerada concentración de capital que engendró estructuras de carácter cada vez más monopolista.

Esto es lo que explica que hayan sido los estratos inferiores de la burguesía y los grandes grupos (no necesariamente nacionales) todavía incapaces de sostener la competencia con los capitales norteamericanos los que movieron la verdadera oposición a la política económica liberal de Quadros, que beneficiaba a los monopolios nacionales y extranjeros, y los que impulsaron, en el período de Goulart, la adopción de medidas restrictivas a las inversiones externas, tales como la reglamentación de la exportación de utilidades, mientras la gran burguesía de São Paulo tendía hacia actitudes mucho más moderadas. Nada de ello impidió que la intensificación de las inversiones norteamericanas en los años cincuenta aumentase desproporcionadamente el peso del factor extranjero en la economía y en la vida política de Brasil. Además de acelerar la transferencia que hizo el Gobierno de sectores básicos de producción a grupos norteamericanos y subordinar

definitivamente el proceso tecnológico brasileño a Estados Unidos, eso aumentó la influencia de los monopolios extranjeros en la elaboración de las decisiones políticas y atenuó la ruptura que se había producido entre la agricultura y la industria.³¹

Sin embargo, como los hechos demostraron, lo que estaba en juego, para todos los sectores de la burguesía, no era específicamente el desarrollo ni el imperialismo, sino la tasa de beneficios. En el momento en que los movimientos de masas en favor de la elevación de los salarios se acentuaron, la burguesía olvidó sus diferencias internas para hacer frente a la única cuestión que le preocupa de hecho: la reducción de sus ganancias. Eso fue tanto más verdadero cuanto que no solamente el alza de los precios agrícolas, que había aparecido a los ojos de la burguesía como un elemento determinante de las reivindicaciones obreras, pasó a segundo plano, en virtud de la autonomía que ganaron tales reivindicaciones, sino también porque el carácter político que éstas asumieron puso en peligro la propia estructura de dominación vigente en el país. A partir del punto en que reivindicaciones populares más amplias se unieron a las demandas obreras, la burguesía —con los ojos puestos en la Revolución Cubana— abandonó totalmente la idea del frente único de clases y se volcó masivamente en las huestes de la reacción.

Esas amplias reivindicaciones populares que mencionamos resultaban en gran parte del dinamismo que ganara el movimiento campesino, pero se explicaban sobre todo por el agravamiento de los problemas de empleo de la población urbana que acarrearía la modernización tecnológica. Esa modernización de origen extranjero, que exigía de la mano de obra una calificación que ésta no tenía, acabó por crear una situación paradójica: mientras aumentaba el desempleo de la mano de obra en general, el mercado de trabajo de la mano de obra calificada se agotaba, constituyéndose en un punto de estrangulamiento que postulaba todo un programa de formación profesional, es decir, tiempo y recursos,

³¹ Principalmente porque las empresas y los accionistas extranjeros dependen de las divisas producidas por la exportación para remitir sus ganancias al exterior.

para ser superado. La fuerza adquirida por los sindicatos de esos sectores (metalurgia, petróleo, industrias mecánicas y químicas) compensó la desventaja que el desempleo creaba para los demás (construcción civil, industria textil), algo que impulsó hacia el alza los salarios en conjunto.

Como solución inmediata al problema, la burguesía optó por la contención coercitiva de los movimientos reivindicatorios y una nueva ola de modernización tecnológica que, mediante el aumento de la productividad del trabajo, permitiese reducir la participación de la mano de obra en la producción y por tanto aflojar la presión que la oferta de empleos ejercía sobre el mercado de trabajo calificado. Para la contención salarial, la burguesía necesitaba crear condiciones que no derivaban, evidentemente, del frente obrero-burgués, que el Gobierno y el PC insistían en proponerle. Para renovar su tecnología no podía contar con las parcas divisas aportadas por la exportación y, ahora, ni siquiera con el recurso a las inversiones extranjeras.

En efecto, desde 1961 se hace cada vez más sensible la resistencia de los sindicatos al proceso inflacionario de los salarios e incluso se verifica entre estos una ligera tendencia a la recuperación, al mismo tiempo que se acelera, por mediación del mecanismo de los precios y en virtud de la rigidez de la oferta agrícola, la transferencia de recursos de la industria hacia la agricultura. Los intentos de la burguesía de imponer una estabilización monetaria (1961 y 1963) fracasan. Sus tentativas de accionar en beneficio propio el proceso inflacionario mediante alzas sucesivas de los precios industriales apenas ponen ese proceso a un ritmo más o menos acelerado, en virtud de las respuestas inmediatas que le dan el sector comercial y agrícola y las clases asalariadas.³² La elevación consecuente de los costos de producción provoca bajas sucesivas en la tasa de ganancias: las inversiones declinan, y no solamente las nacionales sino también las extranjeras.

³² La tasa de inflación se aceleró en 1959, pasando del promedio anual de 20% que presentara entre 1951-1958 a 52%. Después de atenuarse en 1960, aumentó progresivamente hasta alcanzar el 81% en 1963.

Con la recesión de las inversiones extranjeras se cerraba la puerta para las soluciones de compromiso que la burguesía había aplicado desde 1955, al fracasar su primera tentativa para promover el desarrollo capitalista autónomo del país. La situación que debía enfrentar ahora era aún más grave, puesto que con el desarrollo de la crisis de la balanza de pagos, el punto de estrangulamiento cambiario se agudizaba, y esto en el momento mismo en que, terminado el plazo de maduración de las inversiones realizadas en la segunda mitad de los cincuenta, los capitales extranjeros presionaban fuertemente para exportar sus utilidades. Así pues, la crisis cambiaria se traducía en el deterioro de la capacidad para importar, el cual no solamente no podía ser sorteado mediante el recurso a los capitales extranjeros, sino que era agravado por la acción misma de esos capitales. La consecuencia de la presión de esas tenazas sobre la economía nacional era, por primera vez desde los años treinta, una verdadera crisis industrial.

En realidad, lo que se encontraba puesto en jaque era todo el sistema capitalista brasileño. La burguesía —grande, mediana, pequeña— lo comprendió y, olvidando sus pretensiones autárquicas, así como la intención de mejorar su participación frente al socio mayor norteamericano, se preocupó únicamente por salvar el propio sistema. Y fue como llegó al régimen militar, implantado el 1 de abril de 1964.

EL SUBIMPERIALISMO

La dictadura militar aparece así como la consecuencia inevitable del desarrollo capitalista brasileño y como un intento desesperado para abrirle nuevas perspectivas de desarrollo. Su aspecto más evidente ha sido la contención por la fuerza del movimiento reivindicativo de las masas. Interviniendo en los sindicatos y demás órganos de clase, disolviendo las agrupaciones políticas de izquierda, y acallando su prensa, encarcelando y asesinando líderes obreros y campesinos, promulgando una ley de huelga que obstaculiza el ejercicio de ese derecho laboral, la dictadura logró promover, con el terror, un nuevo equilibrio entre las fuer-

zas productivas. Se dictaron normas que fijaban límites a los reajustes salariales y reglamentaban rígidamente las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresarios, que acarrearón una reducción sensible del valor real de los salarios.³³

Para ejecutar esa política antipopular fue necesario reforzar la coalición de las clases dominantes. Desde este punto de vista, la dictadura correspondió a una ratificación del compromiso de 1837 entre la burguesía y la oligarquía latifundista-mercantil. Esto quedó claro al renunciar la burguesía a una reforma agraria efectiva, que hiriese el régimen actual de la propiedad de la tierra. La reforma agraria aprobada por el gobierno militar se ha limitado al intento de crear mejores condiciones para el desarrollo agrícola mediante la concentración de las inversiones y la formación de fondos para la asistencia técnica, dejando las expropiaciones para los casos críticos de conflicto por la posesión de la tierra. Se trata, en suma, de intensificar en el campo el proceso de capitalización que, por otra parte, además de exigir un plazo largo, no pudo realizarse en gran escala, en virtud de la recesión global de las inversiones.

Es necesario, empero, tener presente que no fue la necesidad de respaldo la única causa de esta situación. La contención salarial está vinculada, por un lado, al carácter agudo que tenía para la burguesía el alza de los precios agrícolas, puesto que estos ya no pueden repercutir normalmente sobre el costo de la producción industrial. Por otra parte, la dictadura militar pasó a ejercer una estrecha vigilancia sobre el comportamiento de los precios agrícolas, y los mantuvo coercitivamente en un nivel tolerable para la industria. Finalmente, la razón determinante para el restablecimiento integral de 1937 es el desinterés relativo de la gran

³³ Tomando como base el índice oficial del costo de vida, el Departamento Inter-sindical de Estadísticas y Estudios Socio-Económicos (DIEESE) de São Paulo demostró que en los primeros años del régimen militar, y frente a alzas del costo de la vida de 86% y 45,5%, respectivamente, los salarios aumentaron sólo en 83% en 1964 y 40% en 1965. En este último año la reducción del poder adquisitivo real del salario obrero fue del orden del 15,3%.

burguesía por una dinamización efectiva del mercado interno brasileño. Volveremos luego a este punto.

Otro aspecto de la actuación realizada por la dictadura militar consistió en la creación de estímulos y atractivos a las inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos. Mediante la revocación de limitaciones a la acción del capital extranjero, como las que se establecían en la ley de exportación de utilidades, la concesión de privilegios a ciertos grupos, como pasó con la Hanna Corporation, y la firma de un acuerdo de garantías a las inversiones norteamericanas, se trató de atraer al país esos capitales. Simultáneamente, restringiendo el crédito a la producción (lo que lleva a las empresas a buscar el sostén del capital extranjero o ir a la quiebra, cuando son compradas a bajo precio por los grupos internacionales), estimulando la llamada “democratización del capital” (lo que en la fase de estancamiento implica facilitar al único sector fuerte de la economía, el extranjero, el acceso a por lo menos parte del control de las empresas), creando fondos estatales o privados de financiamiento basados en empréstitos externos, tributando fuertemente la hoja de salarios de las empresas (lo que las obliga a renovar su tecnología a fin de reducir la participación del trabajo y buscar la asociación con capitales extranjeros), el gobierno militar promueve la integración acelerada de la industria nacional a la norteamericana. El instrumento principal para alcanzar este objetivo fue el “Programa de Acción Económica del Gobierno”, elaborado por la gestión de Castelo Branco para el período 1964-1966. Para atraer a los inversionistas extranjeros, sin embargo, el argumento principal que esgrimió el Gobierno fue la baja de los costos de producción en el país, obtenida por la contención de las reivindicaciones de la clase obrera.

La política de integración al imperialismo tiene un doble efecto: aumentar la capacidad productiva de la industria gracias al impulso que da a las inversiones y a la racionalización tecnológica, y, en virtud de esta última, acelerar el desequilibrio existente entre el crecimiento industrial y la creación de empleos por la industria. No se trata, como vimos, sólo de reducir la oferta de empleos para los nuevos contingentes que llegan anualmente, en la proporción

de un millón, al mercado de trabajo: implica también la reducción de la participación de la mano de obra ya en actividad, lo que aumenta fuertemente la incidencia del desempleo.

La integración imperialista subraya, pues, la tendencia del capitalismo industrial brasileño, que lo vuelve incapaz de crear mercados en la proporción de su desarrollo y, más aún, en términos relativos lo impulsa a restringir tales mercados. Se trata de una agudización de la ley general de acumulación capitalista, es decir, la absolutización de la tendencia al pauperismo, que lleva al estrangulamiento de la propia capacidad productiva del sistema, ya evidenciada por los altos índices de “capacidad ociosa” verificados en la industria brasileña aun en su fase de mayor expansión. La marcha de esa contradicción fundamental del capitalismo brasileño lo lleva a la más total irracionalidad, es decir, a expandir la producción mientras restringe cada vez más la posibilidad de crear para ella un mercado nacional, con lo cual comprime los niveles internos de consumo y aumenta constantemente el ejército industrial de reserva.

Esta contradicción no es propia del capitalismo brasileño, sino que es común al capitalismo en general. En los países capitalistas centrales, sin embargo, su incidencia ha sido contrarrestada de dos maneras: con el ajuste del proceso tecnológico a las condiciones propias de su mercado de trabajo y con la incorporación de mercados externos (entre ellos, el mismo Brasil) a sus economías. La irracionalidad del desarrollo capitalista en Brasil deriva precisamente de la imposibilidad en que se encuentra para controlar su proceso tecnológico, ya que la tecnología es para él un producto de importación —y su incorporación está condicionada por factores aleatorios como la posición de la balanza comercial y los movimientos externos de capital—, y también deriva de las circunstancias particulares que el país debe enfrentar para, repitiendo lo que hicieron los sistemas más antiguos, buscar en el exterior la solución al problema del mercado.

Prácticamente esto se traduce, en primer lugar, en el impulso de la economía brasileña hacia el exterior, en el afán de compensar con la conquista de mercados ya formados, principalmente en

Latinoamérica, su incapacidad para ampliar el mercado interno. Esta forma del imperialismo conduce, sin embargo, a un subimperialismo. En efecto, no le es posible a la burguesía brasileña competir en mercados ya repartidos por los monopolios norteamericanos, y el fracaso de la política externa independiente de Quadros y Goulart lo demuestra. Por otra parte, esa burguesía depende para el desarrollo de su industria de una tecnología cuya creación es privativa de dichos monopolios. No le queda, pues, sino la alternativa de ofrecer a estos una sociedad en el proceso mismo de producción en Brasil, y argumentar con las extraordinarias posibilidades de ganancias que la contención coercitiva del nivel salarial de la clase obrera contribuye a crear.

El capitalismo brasileño se ha orientado, así, hacia un desarrollo monstruoso, puesto que llega a la etapa imperialista antes de haber logrado el cambio global de la economía nacional y en una situación de dependencia creciente frente al imperialismo internacional. La consecuencia más importante de este hecho es que, al revés de lo que pasa con las economías capitalistas centrales, el subimperialismo brasileño no puede convertir la explotación que pretende realizar en el exterior en un factor de elevación del nivel de vida interno, capaz de amortiguar el ímpetu de la lucha de clases; por el contrario, por la necesidad que experimenta de proporcionar un sobrepluso a su socio mayor norteamericano, tiene que agravar violentamente la explotación del trabajo en el marco de la economía nacional, en un esfuerzo por reducir sus costos de producción.

Se trata, en fin, de un sistema que ya no es capaz de atender a las aspiraciones de progreso material y de libertad política que hoy movilizan a las masas brasileñas. Inversamente, tiende a subrayar sus aspectos más irracionales, encauzando cantidades crecientes del excedente económico hacia el sector improductivo de la industria bélica y aumentando, por la necesidad de absorber parte de la mano de obra desempleada, sus efectivos militares. No crea, de esta manera, tan sólo las premisas para su expansión hacia el exterior: refuerza también internamente el militarismo,

destinado a afianzar la dictadura abierta de clase que la burguesía se ha visto en la contingencia de implantar.

REVOLUCIÓN Y LUCHA DE CLASE

Es en esta perspectiva que se ha de determinar el verdadero carácter de la revolución brasileña. Por supuesto, nos referimos aquí a un proceso venidero, ya que hablar de él como de algo existente, en la fase contrarrevolucionaria que atraviesa el país, no tiene sentido. Identificar esa revolución con el desarrollo capitalista es una falacia similar a la de la imagen de una burguesía antiimperialista y antifeudal. El desarrollo industrial capitalista fue, en realidad, lo que prolongó en Brasil la vida del viejo sistema semicolonial de exportación. Su desarrollo, en lugar de liberar al país del imperialismo, lo vinculó a éste aún más estrechamente y acabó por conducirlo a la presente etapa subimperialista, que corresponde a la imposibilidad definitiva de un desarrollo capitalista autónomo en Brasil.

La noción de una “burguesía nacional” de poco alcance, capaz de realizar las tareas que la burguesía monopolista no llevó a cabo, no resiste, a su vez, el menor análisis. No se trata solamente de señalar que los intereses primarios de esos estratos burgueses son los de cualquier burguesía, es decir, la preservación del sistema contra toda amenaza proletaria, como lo demostró su respaldo al golpe militar de 1964. Se trata, principalmente, de ver que la actuación política de la llamada “burguesía nacional” expresa su rezago económico y tecnológico y corresponde a una posición reaccionaria, aun en relación con el desarrollo capitalista.

El motor del desarrollo está constituido, sin lugar a dudas, por la industria de bienes intermedios y de equipos, es decir, aquel sector donde reina soberana la burguesía monopolista asociada a los grupos extranjeros. Son las necesidades propias de tal sector las que impulsaron al capitalismo brasileño hacia la etapa subimperialista, único camino que encontró el sistema para seguir con su desarrollo. A esta alternativa, la “burguesía nacional” sólo puede contraponer una demagogia nacionalista y populista que

apenas encubre su incapacidad para hacer frente a los problemas planteados por el desarrollo económico.

La prueba de ello está en que, a pesar de la fuerza que los sectores medios y pequeños de la burguesía disfrutaron en el período de Goulart, gracias a que sus representantes ideológicos ocupaban la mayoría de los puestos oficiales, no lograron encontrar una salida para la crisis económica que se avecinaba. Por el contrario, a medida que la evolución de la crisis se traducía en el incremento de las reivindicaciones populares y en la radicalización política, esos sectores se sumergieron en la perplejidad y el pánico, hasta el punto de entregar, sin resistencia, a la burguesía monopolista el liderazgo que tenían.

La política subimperialista de la gran burguesía, con su intento de compensar la caída de las ventas internas con la expansión exterior, no ha podido, sin embargo, aprovechar a la llamada “burguesía nacional”, la cual, en medio de quiebras y suspensiones de pagos se vio empujada a una situación desesperada. Aprovechándose de las dificultades encontradas para ejecutar la política subimperialista (dificultades determinadas en gran parte por el esfuerzo de guerra norteamericano en Vietnam y los cambios de la política argentina posteriores al golpe militar de 1966), esta burguesía maniobró para introducir modificaciones en la política económica del Gobierno, a fin de aliviar su situación. Tales modificaciones se cifran, principalmente, en una liberación del crédito oficial, que si se realizara sin una correspondiente liberalización de los salarios, agravaría aún más la explotación de la clase obrera, y si se completara con la liberalización salarial, restauraría el *impasse* de 1963 que condujo a la implantación de la dictadura militar.

Es evidente, pues, que la búsqueda de soluciones intermedias, basadas en los intereses de los sectores burgueses más débiles, resulta impracticable o es susceptible de conducir, en un plazo más o menos corto, a la clase obrera y demás grupos asalariados a una situación peor que aquella en la que se encuentran. Hay que recalcar que esto no sería posible sin un endurecimiento todavía mayor de los aparatos de represión y un agravamiento del

carácter parasitario que tienden a asumir esos sectores burgueses con relación al Estado. En otras palabras, una política económica pequeñoburguesa, en las condiciones vigentes en Brasil, muy probablemente exigiría la implantación de un verdadero régimen fascista.

En cualquier caso, sin embargo, no se estaría dando solución al problema del desarrollo económico, que no puede ser logrado, como pretende la “burguesía nacional”, obstaculizando la incorporación del progreso tecnológico extranjero y estructurando la economía con base en unidades de baja capacidad productiva. Para las grandes masas del pueblo, el problema está, inversamente, en una organización económica que no sólo admita la incorporación del proceso tecnológico y la concentración de las unidades productivas, sino que las aceleren, sin que ello implique agravar la explotación del trabajo en el marco nacional y subordinar definitivamente la economía brasileña al imperialismo. Todo está en lograr una organización de la producción que permita el pleno aprovechamiento del excedente creado, vale decir, que aumente la capacidad de empleo y producción dentro del sistema y eleve los niveles de salario y de consumo. Como esto no es posible en el marco del sistema capitalista, no le queda al pueblo brasileño sino un camino: el ejercicio de una política obrera, de lucha por el socialismo.

A quienes niegan a la clase obrera de Brasil la madurez necesaria para ello, el análisis de la dialéctica del desarrollo capitalista del país ofrece una rotunda respuesta. Han sido, en efecto, las masas trabajadoras las que, con su movimiento propio e independiente de las consignas reformistas que recibían de sus directivas, han hecho crujir las articulaciones del sistema y determinado sus límites. Llevando adelante sus reivindicaciones económicas, que han repercutido en los costos de producción industrial, y atrayéndose la solidaridad de las clases explotadas en un vasto movimiento político, el proletariado ha agudizado la contradicción surgida entre la burguesía y la oligarquía terrateniente-mercantil e impedido a la primera el recurso a las inversiones extranjeras, forzándola a buscar el camino del desarrollo autónomo. Si al fi-

nal la política burguesa no condujo sino a la capitulación y, más que a esto, a la reacción, es porque en verdad ya no existe para la burguesía la posibilidad de conducir a la sociedad brasileña hacia formas superiores de organización y de progreso material.

El verdadero estado de guerra civil implantado en Brasil por las clases dominantes, del cual la dictadura militar es expresión, no puede ser superado mediante fórmulas de compromiso con algunos estratos burgueses. La inanidad de esos compromisos, frente a la marcha implacable de las contradicciones que plantea el desarrollo del sistema, impulsa necesariamente a la clase obrera a las trincheras de la revolución. Por otra parte, el carácter internacional que la burguesía subimperialista pretende imprimir a su explotación identifica la lucha de clase del proletariado brasileño con la guerra antiimperialista que se libra en el continente.

Más que una redemocratización y una renacionalización, el contenido de la sociedad que surgirá de ese proceso será el de una democracia nueva y de una nueva economía, abiertas a la participación de las masas y vueltas hacia la satisfacción de sus necesidades. En ese marco, los estratos inferiores de la burguesía encontrarán, si quieren, y con carácter transitorio, un papel que desempeñar. Crear ese marco y dirigir su evolución es, sin embargo, una tarea que ningún reformismo podrá sustraer a la iniciativa de los trabajadores.